

obstante, mientras Tapia se encontraba en el extranjero, uno de sus subordinados, Carlos Moreno, anunció que el gobierno seguiría adelante con una parte de la legislación. Esto encolerizó a la oposición, mientras Tapia, furioso ante este sabotaje por parte de uno de sus ayudantes, presentó la renuncia, que Allende rechazó. A muchos, este episodio les pareció una prueba más de que el gobierno apenas podía controlar a sus propios funcionarios.

Sin embargo, la ENU no fue la única situación que tocó las susceptibilidades políticas. Poco después de las elecciones, La Moneda anunció que expropiaría (contrariamente a lo que estipulaba la Ley de reforma agraria) los predios que tuvieran una superficie de entre cuarenta y ochenta hectáreas. El gobierno también continuó nacionalizando las fábricas. El PDC respondió reviviendo un tema constitucional que había quedado pendiente en 1972, con la esperanza de conseguir una enmienda que limitara el Área Social. Mientras el Congreso y el presidente se enredaban una vez más en sus discusiones constitucionales, el país parecía atascarse en una parálisis creciente. Los trabajadores seguían ocupando las fábricas, extendiendo los cordones industriales. Los grupos paramilitares tanto de derecha como de izquierda se preparaban para la lucha armada que sus corazones anhelaban. Las manifestaciones callejeras se intensificaban. La retórica en ambos bandos se iba haciendo más y más estridente, al igual que la prensa, que a menudo recurría a un lenguaje soez y degradante (un periódico de izquierda describió lisa y llanamente a los jueces de la Corte Suprema como «viejos de mierda»). En los muros, proliferaban los eslóganes. Los de la izquierda amenazaban a todos los «momios» con el pelotón de fusilamiento. Los de la derecha le exigían quejumbrosamente a las fuerzas armadas que intervinieran. En algunos muros se escribía una sola palabra amenazadora: *Jakarta*—clara alusión a la masacre de Indonesia donde los militares habían matado a 300.000 comunistas ocho años antes—.

En esta atmósfera, los militares comenzaron a aproximarse al centro del escenario. Muchos oficiales se sentían agraviados ahora por el gobierno que antes habían jurado proteger, especialmente cuando los civiles anti-Allende habían insultado al cuerpo de oficiales, sembrando dudas sobre su inteligencia (y, por lo general, sobre su virilidad). Mientras tanto, la izquierda le echaba leña al fuego denunciando a los oficiales, exhortando a los reclutas para que se amotinaran y haciendo una llamada a las milicias de los trabajadores para que reemplazaran a las fuerzas armadas profesionales. Ambos bandos estaban con los nervios de punta. En un incidente famoso (27 de junio de 1973), el general Prats obligó a una mujer a desviar su auto hasta la acera, después de que ella le hubiera sacado la lengua. Si una muchedumbre hostil no hubiera intervenido, él la habría arrestado.

El creciente descontento militar se hizo evidente el 29 de junio de 1973, cuando el Segundo Regimiento Blindado se rebeló. En cierto sentido, el levantamiento fue cómico. La dotación de un tanque se detuvo a echar combustible en una gasolinera (le pagaron al dependiente) y los tanques obedecieron escrupulosamente los semáforos en su camino

a derrocar al gobierno. No obstante, la guardia presidencial de Carabineros se mantuvo firme. El general Prats, yendo de un tanque a otro armado con una ametralladora, ordenó a los amotinados que se rindieran. Lo hicieron. El golpe se colapsó. Mientras tanto, los dirigentes de los «cordones industriales», alentados verbalmente por Allende y la CUT, tomaron más de 350 fábricas, que se negaron a abandonar incluso después de que el Regimiento se hubiera rendido.

Aunque Allende sobrevivió al «tancazo» (como muy pronto se apodó la rebelión), su posición política se deterioraba rápidamente. El presidente pidió al Congreso que le otorgara poderes excepcionales, pero los legisladores rechazaron la petición. A continuación, Allende intentó aplacar a la oposición reorganizando su gabinete, pero no logró poner a los militares en Ministerios importantes y esto socavó el esfuerzo de reconciliación. A estas alturas, los nacionales habían rechazado cualquier tipo de arreglo con Allende y el PDC veía la presencia militar en el gabinete como la única forma de defender la Constitución. Allende, sin embargo, realizó entonces un último esfuerzo desesperado por llegar a un acuerdo con el PDC. Se pasó la mayor parte del 30 de julio negociando los principales puntos en conflicto con el presidente del Partido Demócrata Cristiano de entonces, el senador Patricio Aylwin, y con el vicepresidente del mismo, el senador Osvaldo Olguín. Allende finalmente aceptó la demanda del PDC de que el gobierno pusiera en vigor la Ley de control de armas, discutiera la participación militar en el gabinete y considerara algunas restricciones al Área Social y a la reforma agraria. A cambio, sin embargo, él pedía al Congreso que reconociera que se requería una mayoría de dos tercios para revocar los vetos presidenciales. Ambas partes prometieron establecer comités especiales para continuar con las negociaciones. No obstante, debido a la presión ejercida por algunos intransigentes, tanto de la UP como del PDC, los comités nunca se reunieron. El 17 de agosto, Allende y Aylwin se vieron nuevamente (en secreto) en la casa del cardinal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, pero resultó imposible retomar las negociaciones. Las «conversaciones» Allende-Aylwin fueron el último esfuerzo real que ambas partes hicieron para llegar a un acuerdo.

El país había entrado en los últimos días de la «transición hacia el socialismo», cuyo destino se había mostrado tan aciago. La economía, debilitada por la costosa huelga de El Teniente, se vio aún más deteriorada por la acción recurrente de los camioneros, quienes afirmaban que el gobierno estaba tratando de destruirlos retirando los repuestos del comercio. Tal como en octubre de 1972, los gremios se movilizaron en un segundo enfrentamiento decidido. Este movimiento fue aún más grande que el anterior. Una vez más, a la polarización se sumaba la parálisis nacional.

Es grande la tentación de comparar la amarga lucha de 1973 con episodios similares del propio pasado de Chile: la contienda entre Manuel Montt y la Fusión Liberal Conservadora; la movilización de los partidos contra Balmaceda; incluso, quizá, la resis-

tencia a las reformas de Arturo Alessandri. En estos tres casos, el resultado fue algún tipo de trastorno mayor: la guerra civil o la intervención militar. El enfrentamiento entre la UP y la oposición PDC-Nacional había llegado a una escala mucho mayor que cualquiera de sus predecesores. La diferencia esencial radicaba en que ocurría en la época de la política moderna y de masas, en la época —sin ir más lejos— de los medios de comunicación masivos, con lo cual difícilmente había alguien en el país que no se viera afectado o ignorara lo que estaba ocurriendo. Las familias estaban divididas; antiguas amistades habían llegado a un punto de ruptura; todo el mundo perdía la cabeza. Hubo un momento en que muchas de las virtudes chilenas tradicionales, especialmente la virtud de la convivencia, esa capacidad para respetar puntos de vista diferentes, parecían totalmente en retroceso.

Una pregunta que se suele plantear a posteriori es si la abrumadora emergencia de 1973 fue causada o bien exacerbada por la intromisión externa, específicamente por parte de los Estados Unidos. Ni el Presidente Nixon ni su inútil asesor en política internacional (y pronto secretario de Estado) Henry Kissinger se preocuparon de mantener en secreto su aversión por el gobierno de la UP. Impulsados por su irreflexiva visión de la *Realpolitik*, ellos fueron sin duda los principales autores de la restricción crediticia contra Chile organizada en Washington, y de las diversas formas de «acción encubierta» empleadas por la CIA en Chile en sus esfuerzos por lograr la «desestabilización» política²⁷. Las intenciones de Nixon eran claras como el cristal y la asignación de 8 millones de dólares a la CIA para sus operaciones contra Allende (gran parte de los cuales fueron utilizados para subsidiar a la oposición, incluido *El Mercurio*) fue por mucho tiempo de dominio público, gracias especialmente al Congreso de los Estados Unidos. No obstante, siempre queda la duda de si la CIA produjo una gran diferencia: a pesar de lo triste que pueda ser esta afirmación, la verdadera «desestabilización» de Chile fue obra de los chilenos. Tal como afirmó Patricio Aylwin, dieciséis años después, «a todos nos cupo responsabilidad».

En el devastador clima político de mediados de 1973, los acontecimientos desarrollaron una inercia propia ineluctable. El 26 de julio, unos atacantes desconocidos asesinaron al edecán naval de Allende, comandante Arturo Araya. Se hicieron esfuerzos por sobornar a una unidad de la FACH cerca de Viña del Mar. En una acción todavía más nefasta, el MIR, el MAPU y los militantes socialistas trataron de fomentar un motín en dos barcos de guerra anclados en Valparaíso y también en la base naval de Talcahuano. Carlos Altamirano anunció provocadoramente que sabía de antemano sobre el abortado motín naval y que había apoyado tales acciones. ¿Realmente pensaba que esto no dejaría secuelas en los corazones y las mentes de los militares?

²⁷ Esta horrible palabra entró en el idioma inglés dentro del contexto chileno. Ver la entrada para «*destabilization*» en el *Oxford English Dictionary*, 2ª ed. El verbo «*to destabilize*» es considerablemente más antiguo.

A medida que la atmósfera de violencia empeoraba, Allende trató desesperadamente de mantener cohesionado a su gobierno. A comienzos de agosto, formó un nuevo gabinete, nombrando al general Prats como ministro de Defensa, al almirante Raúl Montero como ministro de Hacienda y al general de la FACH, César Ruiz, como ministro de Obras Públicas. La decisión del presidente de volver a incluir a los militares en el gobierno, obviamente concebida para reconciliarse con el PDC, llegó demasiado tarde. El país ya había entrado en un estado de limbo político. Ninguna persona o institución imponía suficiente respeto como para superar el *impasse*. Los «ultras» de la UP, dirigidos por un Altamirano siempre con tanto tacto, se negaron a negociar con los «dirigentes reaccionarios y contrarrevolucionarios o con los partidos»²⁸. La oposición ventilo similares sentimientos, aunque sin la misma retórica. Una coalición de los parlamentarios del PDC y del Partido Nacional, argumentando la tolerancia del gobierno ante los grupos paramilitares armados, su uso de oscuros decretos para expropiar la propiedad y su continua negativa a cumplir las decisiones judiciales, aprobó una resolución (el 22 de agosto) que acusaba al gobierno de quebrantar la ley a todo nivel. A la coalición le faltó poco para comenzar a defender un golpe de estado; aunque pedía a los miembros militares del gabinete «poner término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes»²⁹. Esto dejaba al presidente Allende virtualmente con las manos atadas. Su propuesta final para dar una solución política a la crisis —un plebiscito nacional que, posiblemente, llevaría a una asamblea constitucional— fue sometida a una seria discusión por los partidos de la UP a comienzos de septiembre, pero se vio superada por los acontecimientos.

Los militares, ante la opción de defender al gobierno y montar una rebelión, finalmente eligieron esto último. «Quien salva a su Patria no viola ley alguna» —un oficial naval citaría la frase de Napoleón de que la suerte, finalmente, estaba echada³⁰—. Sin embargo, la decisión no fue para nada fácil. Aunque algunos oficiales habían contemplado la posibilidad de un golpe de estado ya a mediados de 1972, esta idea tardó en prosperar. El creciente caos, las insinuaciones de la oposición, la demanda pública efectuada por los militantes de la izquierda de que el Estado reemplazara las fuerzas armadas por «milicias populares» y el abortado motín naval (con el apoyo explícito de Altamirano) —todo esto convenció finalmente a la mayoría de los oficiales de que debían retirar su apoyo al gobierno de Allende—.

Antes de que los militares pudieran actuar, sin embargo, tenían que sacar del paso a las personas designadas por Allende. Cuando una delegación de generales informó a Prats de que ya no gozaba de su confianza, el comandante en jefe renunció (21 de agosto) —ya antes había sido el blanco de una manifestación impropia por parte de sus esposas—. Lo reemplazó

²⁸ Arturo Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes. Chile*, Baltimore, 1987, pág. 94.

²⁹ *El Mercurio*, 23 de agosto de 1973.

³⁰ Florencia Varas y José Manuel Vergara, *Operación Chile*, Buenos Aires, 1974, pág. 73.

el general Augusto Pinochet, a quien Allende consideraba tan sólidamente «constitucionalista» como a Prats. Cambios similares ocurrieron en los otros servicios armados. Los oficiales navales, emulando a sus colegas del Ejército, lograron la deposición del comandante de la Marina, almirante Raúl Montero, cuyo cargo fue ocupado por el almirante José Toribio Merino. El comandante de la FACH, general César Ruiz, fue destituido por el propio Allende, en un tenso episodio. Su sucesor, el general Gustavo Leigh, no necesitaba granjearse su amistad. El camino había quedado despejado. El domingo 9 de septiembre, los dirigentes de las fuerzas armadas, con el apoyo de Carabineros, realizaron un pacto para derrocar al gobierno.

La operación no requirió muchos preparativos. El Ejército pretextó el desfile militar anual del 19 de septiembre —incluida en las fiestas patrias, casi tan antiguas como la República misma— para enmascarar el traslado de unidades a Santiago. El martes 11 de septiembre (en un comienzo, el general Pinochet había propuesto el 14 de septiembre) se fijó como fecha para la rebelión. Tal como estaba planeado, la flota zarpó de Valparaíso, supuestamente para participar en las maniobras conjuntas con la Marina norteamericana que se venían realizando desde hacía muchos años. Amparados por la noche, los buques de guerra volvieron al puerto para capturar Valparaíso. La FACH ya había ordenado a sus bombarderos que se dirigieran hacia el sur, libre de peligro. El 11 de septiembre, antes del amanecer, el Ejército entró en acción. A primeras horas de la mañana, había capturado Concepción «la Roja», mientras la Marina tomaba el control de Valparaíso sin dificultades. La lucha más encarnizada se produjo en Santiago, especialmente entre el Ejército y los francotiradores. El presidente Allende, informado de la rebelión naval en las primeras horas de la mañana, dejó su residencia para dirigirse a La Moneda. Allí se enteró de que los comandantes en jefe apoyaban el golpe de estado y de que los carabineros que defendían el palacio se estaban retirando, dejando al presidente virtualmente sin protección.

Aunque las fuerzas armadas rápidamente redujeron a sus opositores en las provincias y en la capital, el propio Allende continuó resistiendo. Atrincherado en La Moneda con un puñado de guardias personales, rechazó el ofrecimiento de una salida segura del país. Transmitió al aire un último discurso profundamente conmovedor a través de una emisora de radio que todavía no había caído en manos de los militares. Traicionado por sus soldados, el presidente se mantuvo firme. Para realizar un ataque sorpresa, los *Hawker Hunters* de la FACH volaron desde Concepción y bombardearon en un vuelo rasante el palacio³¹; luego, la infantería asaltó La Moneda en llamas.

Nunca antes el palacio había ardió. Fue el momento más desolador y trágico de la historia moderna de Chile. Alrededor de las dos de la tarde, Salvador Allende —médico, masón, socialista y presidente de la República— se suicidó disparándose a la cabeza con una ametralladora.

³¹ Los cohetes fueron disparados justo desde la Estación Mapocho.

Los años de Pinochet

No se mueve ninguna boja de este país si yo no la estoy moviendo.

General Augusto Pinochet, septiembre de 1981

CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN DE PINOCHET

El 11 de septiembre de 1973 —«el once», como lo apodaron los chilenos desde entonces— se produjo la peor quiebra política en la historia de la República. Quizá debido a que la desesperación nacional había alcanzado un nivel inaudito en 1973¹, las secuelas fueron mucho más prolongadas de lo que nadie hubiera podido imaginarse. A finales de julio de 1989, el general Augusto Pinochet rompió el récord de mayor permanencia en el mando entre todos los gobernantes chilenos desde 1540 —hasta entonces detentado por el gobernador Gabriel Cano de Aponite con quince años y diez meses (1717-1733)—. En el momento de dejar el cargo, Pinochet había gobernado Chile ocho meses más que su predecesor colonial.

La mano dura de una represión inclemente golpeó de inmediato con el nuevo régimen. Se cerró el Congreso. Los partidos de la UP fueron prohibidos; otros, declarados «en recesos» (hasta 1977, cuando también fueron prohibidos). Se impuso un estricto toque de queda nocturno que duró varios años. Los periódicos y las revistas de izquierda desaparecieron de los quioscos. La administración pública fue purgada concienzudamente. En la etapa inicial del régimen, prácticamente todas las instituciones nacionales importantes (incluida la Federación de fútbol) quedaron en manos de oficiales militares o navales, algunos de los cuales ya estaban en retiro y fueron llamados de nuevo al servicio. Uniformados «rectores designados» fueron puestos a la cabeza de las universidades (también purgadas con minuciosidad). De la noche a la mañana, la atmósfera en Chile se vio transformada. El primer ministro del Interior del régimen, general Oscar Bonilla (muerto

¹ Ambos autores de manera independiente (tanto antes como después del golpe) escucharon a amigos chilenos perfectamente inteligentes y racionales expresar la idea de que anhelaban una intervención militar extranjera (norteamericana o europea) para terminar (en el primer caso) con la total confusión y (en el segundo) con la dictadura.

en un accidente de helicóptero en 1975) replicó a un sindicalista del comercio que lo visitaba en su oficina: «Deje de usar la palabra *exigencia*; no se olvide que ésta es una dictadura».² Nadie podría haberlo expresado mejor.

La ferocidad del golpe y la severidad de los primeros decretos de la Nueva Junta militar hizo que los observadores (especialmente quizá los periodistas) asumieran que la carnicería había sido enorme. Lo que Edward Gibbon llamó una vez «el cálculo melancólico de las calamidades humanas» pasó a ser en los años siguientes un juguete político. Radio Moscú informó en una transmisión memorable de que 700.000 personas habían muerto en los dos días que duró el golpe. Incluso el hecho de que se hubiera asesinado a unos cuantos miles en poco tiempo (muchos de ellos simplemente desaparecidos), ya era algo muy traumático para cualquier país pequeño, en especial para un país pequeño que no estaba acostumbrado a tales convulsiones. Los activistas de los partidos de la UP fueron perseguidos sin tregua hasta su captura; algunos fueron fusilados directamente; muchos otros (al menos 7.000) fueron conducidos como rebaños al estadio nacional de Santiago, el principal centro donde comenzaban los interrogatorios. Varias docenas de destacados allendistas (incluidos los ministros del gabinete) fueron enviados a los desolados parajes de la isla Dawson en el Estrecho de Magallanes. Al igual que en 1948, Pisagua recibió cierta cantidad de prisioneros. Lo mismo ocurrió con la isla de la Quiriquina, en la bahía de Talcahuano, donde Bernardo O'Higgins había visto pastar alguna vez a su ganado. A todo lo largo y ancho del país se abrían campos de concentración. Los arrestos se contaban en decenas de miles y decenas de miles eran también los chilenos que fueron simplemente desterrados. A mediados de 1978, tan sólo los exiliados en Europa occidental sumaban casi 30.000 chilenos. Cientos de miles ya se habían exiliado a finales del decenio. Sólo en la década de 1980 se les permitió a los exiliados volver a Chile y muchos (pero de ninguna manera todos) retornaron a su patria.

La paz y la calma externas, la tranquilidad tan a menudo ensalzada por la Junta y quienes estaban a cargo de promoverla, rápidamente volvieron a Chile. Con el fin de asegurar su mantenimiento, se creó sin demora un moderno Estado policial. Antes del final de 1973, una nueva policía secreta, controlada directamente por el general Pinochet, había sido formada. Se trataba de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) —sinistro acrónimo que los periódicos dudaron varios meses en publicar—. Comandada por el coronel (luego general) Manuel Contreras, la DINA reclutó a la mayoría de sus agentes entre los miembros del Ejército. En 1977 contaba con una fuerza activa de alrededor de 10.000 hombres: sus informantes pagados sumaban dos o tres veces esa cantidad. A la DINA se pueden atribuir la mayoría de los horribles incidentes de tortura documentados por la Iglesia católica (en Chile) y por organizaciones como Amnistía Internacional (en el extran-

² Citado en Eugenio Ahumada et al., *Chile, la memoria prohibida*, 3 vols., vol. III, 1989, pág. 491.

jero). Sus conocidos centros de tortura incluían la Villa Grimaldi, una mansión en La Reina (barrio en los márgenes orientales de Santiago) —que el retorcido humor de la DINA bautizó como «el palacio de la risa»—. En sus primeros meses, la DINA se puso como objetivo al MIR y al Partido Comunista, y no les dio tregua. Fuentes fidedignas señalan que el propio general Pinochet habría dicho: «Los miembros del MIR *deben* ser torturados [...] Sin tortura no cantan».³ Algunos cantaron; a otros, la DINA logró «convertirlos» (para usar el gráfico lenguaje del espionaje moderno).

En ciertas ocasiones, el brazo de la DINA llegó mucho más allá de las fronteras chilenas. Quienes corrían el mayor peligro eran aquellas figuras exiliadas que podían encabezar un nuevo gobierno postmilitar. En septiembre de 1974, el general Carlos Prats y su esposa (quienes se habían autoexiliado inmediatamente después del golpe de estado) fueron asesinados con un coche bomba colocado frente a su apartamento en Palermo, Buenos Aires. En octubre de 1975, el popular político del PDC Bernardo Leighton fue tiroteado en Roma y apenas sobrevivió (falleció luego en 1995). Otro coche bomba segó la vida de Orlando Letelier (septiembre de 1976), esta vez fuera de la embajada chilena en Washington D. C., donde este distinguido y querido socialista había trabajado antes como embajador del presidente Allende. El ultraje terrorista perpetrado en la capital de su nación puso en campaña de inmediato al Departamento de Justicia norteamericano y al FBI. El rastro de las pruebas llevaba inexorablemente a Santiago y a la DINA. La presión norteamericana (ejercida hábilmente) consiguió la extradición del principal agente de la DINA responsable (casualmente un norteamericano, que luego fue encarcelado en los Estados Unidos); sin embargo, otras extradiciones, incluida la de Contreras, fueron denegadas con decisión.

La intensa conmoción nacional e internacional provocada por el caso Letelier (y las fuertes opiniones en el interior del Ejército) obligaron a Pinochet a desmantelar en cierta medida la DINA. Ésta fue reemplazada (en agosto de 1977) por una policía secreta algo más reducida y conocida como la Central Nacional de Informaciones (CNI). A estas alturas, el nivel de represión había disminuido un poco. Enero de 1977 fue el primer mes tras el golpe de estado en que no se reportó a la Iglesia católica ninguna «desaparición». Sin embargo, las desapariciones, la tortura y el asesinato siguieron ocurriendo a intervalos regulares casi hasta el final del régimen militar. Intenso furor provocó en marzo de 1985 el asesinato de tres profesionales comunistas (un profesor, un sociólogo y un artista retirado); fueron degollados y sus cuerpos abandonados en una carretera a las afueras de Santiago.

Con los partidos políticos prohibidos, las cortes de justicia vergonzosamente descendientes y la vigilancia de la policía secreta sobre toda la sociedad, la única institu-

³ Citado en Sheila Cassidy, *Audacity to Believe*, Londres, 1977, pág. 158.

ción capaz de conservar alguna línea más o menos independiente era la Iglesia católica. Aproximadamente un mes después del golpe de estado, el cardenal Raúl Silva Henríquez promovió la creación de un «Comité de la Paz» ecuménico que debía prestar ayuda legal a las víctimas de la represión y llevar un archivo de las violaciones a los derechos humanos. En noviembre de 1975 se ordenó su cierre, pero el trabajo (siempre difícil y a veces incluso heroico) continuó en una nueva Vicaría de la Solidaridad, que dependía directamente del propio Cardenal (creada en enero de 1976). Pinochet y sus colegas recibían enfurecidos las críticas de la Iglesia, que ésta extendió después a la política económica del régimen. Dada la posición de la Iglesia en la vida chilena resultaba imposible efectuar ningún contrataque serio. En abril de 1977, cuando un ministro de Justicia se permitió reafirmar comentarios desusadamente agrios sobre la Iglesia, Pinochet lo destituyó.

En los regímenes autoritarios, la política no desaparece; simplemente se torna secreta. El rasgo más notable de la política autoritaria chilena tras septiembre de 1973 fue el irrefrenable auge del general Pinochet. Su posición como comandante en jefe del Ejército le daba una ventaja sobre sus colegas, que él rápidamente supo reconocer. La idea original de que la presidencia de la Junta rotara entre sus miembros (el propio Pinochet; el almirante José Toribio Merino, Marina; el general Gustavo Leigh, FACH; el general César Mendoza, Carabineros) fue desechada rápidamente. A finales de 1974, Pinochet se había arrogado el título de presidente de la República, con lo cual el régimen se fue haciendo cada vez más personal. Y aunque no se llegó a constituir ningún verdadero «culto a la personalidad» de Pinochet real y sistemático, sus uniformes se fueron haciendo cada vez más espléndidos con los años y, en 1981, revivió (para su uso personal) el antiguo título colonial de capitán general. El paso siguiente, decían los ingeniosos de Santiago, era restaurar la encomienda.

Aunque en los primeros años del régimen se produjeron algunos cambios administrativos importantes —especialmente la división de la República en doce nuevas regiones⁴—, Pinochet (al igual que Ibáñez en la década de 1920) no realizó esfuerzos serios por consolidar un movimiento político propio. Tras el trauma de 1973, tal movimiento podría haber contado con numerosos seguidores si se lo hubiera organizado con suficiente rapidez, pero también habría entrado en conflicto con el deseo de Pinochet de «despolitizar» al país por un largo periodo. Y, además, al capitán general nunca le faltó el apoyo masivo de la población. La hostilidad contra Allende y la UP se tradujo fácilmente en admiración por su némesis. A un nivel más profundo, la severa imagen de Pinochet (realzada por los

⁴ Las nuevas regiones (1974), cada una gobernada por un intendente regional y con cierta cantidad de provincias, fueron numeradas del I al XII; Santiago y sus zonas aledañas pasaron a formar el Área Metropolitana. Veinte años después, las regiones (a las cuales generalmente se hacía referencia por sus números) estaban empujando a cobrar una identidad propia.

anteojos oscuros que solía llevar) tocaba sin duda un punto sensible en la cultura chilena. En tanto castigaba a los indisciplinados y premiaba a los obedientes, ¿no era acaso el representante máximo de la autoridad del patrón de fundo? ¿Acaso no tenía también algo de la astucia y del ingenio del huaso tradicional? Puede que haya sido un dictador, pero al menos era reconocible como un dictador *chileno*. Para él, dichas cualidades constituían una fuente de fuerza. Además, tampoco se puede negar que sus rudos llamamientos a la reconstrucción nacional y sus invocaciones a Diego Portales y Bernardo O'Higgins (quizá incluso su autoidentificación con ellos), tocaban una fibra patriótica en muchos corazones⁵.

Propia de un huaso, la sagacidad de Pinochet le sirvió mucho para mantener a raya a quienes desafiaban su poder personal. Cuando su colega de la FACH, el general Leigh, declaró en un periódico italiano —con una falta total de tacto— sus esperanzas de que pronto se produjera una «normalización» política, Pinochet rápidamente (y corriendo algunos riesgos) lo destituyó (julio de 1978)⁶. También se mantuvo firme en el Caso Letelier, lo cual tensó las relaciones con los Estados Unidos, cuya política internacional se encontraba entonces en una etapa bastante atípica gracias a la positiva fe del presidente Jimmy Carter en los derechos humanos. Las restricciones norteamericanas en términos de ayuda militar (impuestas por primera vez en diciembre de 1974 y ampliadas en febrero de 1976) no tuvieron repercusiones significativas para el régimen: los países europeos, salvo ciertas prohibiciones de corta duración, estaban en condiciones (al igual que Brasil) de abastecer con armas a Chile. Además, la propia industria de armamentos del país se vio favorecida con una especie de florecimiento. Esto quedó de manifiesto con el auge de la planta de Iquique del empresario Carlos Cardoen, quien, al cabo de poco tiempo, comenzó a vender bombas de racimo a Irak.

En términos inmediatos, más peligrosa que Jimmy Carter resultó la repentina crisis que estalló entre Chile y Argentina a raíz de una antigua disputa sobre tres pequeñas islas en el canal Beagle. La disputa ya había sido sometida a la mediación de la corona británica (1971). En enero de 1978, Argentina rechazó la decisión de la reina Isabel II de otorgar las islas a Chile. La tensión entre Santiago y Buenos Aires se tornó muy seria y, durante algunas semanas, la perspectiva de una guerra pareció muy real. En diciembre de 1978, el papa Juan Pablo II impuso con éxito su mediación y el peligro inmediato se esfumó. Un primer

⁵ Un culto oficial menor a la persona de Diego Portales se vio en los primeros años del régimen. Éste desapareció a finales de la década de 1970, probablemente por el énfasis renovado que le dio a O'Higgins la celebración de su bicentenario (1978).

⁶ Leigh fue reemplazado por el general Fernando Matthei, quien formó parte de la Junta mientras el régimen se mantuvo. El general Mendoza, director de Carabineros, renunció (agosto de 1985) como resultado del juicio por el asesinato de tres profesionales comunistas en marzo de 1985 y fue reemplazado por el general Rodolfo Stange.

borrador del fallo papal (que confirmaba la soberanía chilena de las islas) estuvo listo a finales de 1980. No obstante, el régimen militar de Argentina seguía faltando a su deber. Entonces, Pinochet tuvo un inesperado golpe de suerte. La derrota de Argentina por parte de Gran Bretaña en la breve guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982) —durante la cual Chile prestó una ayuda discreta y bastante secreta a los británicos— eliminó la perspectiva de futuras acciones militares por ese lado. En 1985 se firmó el tratado correspondiente.

Para entonces, el régimen chileno había entrado en una segunda etapa. En julio de 1977, el propio Pinochet anunció su intención de conducir a Chile a una nueva democracia, si bien «protegida». Un pequeño grupo de juristas conservadores ya se encontraba trabajando (a un paso bastante pausado) en una nueva Constitución. El borrador completo fue entregado al nuevo Consejo de Estado, creado en 1976 y con características más bien honoríficas. Cuando su presidente, Jorge Alessandri, hizo algunas sugerencias que Pinochet calificó de demasiado liberales, renunció molesto. El tenor de la versión final era marcadamente autoritario. Entre otras cosas, establecía una Presidencia de ocho años extremadamente fuerte, un Congreso con poderes más limitados que antes (y con un tercio del senado designado, en vez de elegido) y varios mecanismos institucionales para garantizar la influencia militar en los futuros gobiernos. Además, los «artículos transitorios» (muy numerosos) seguirían vigentes por casi una década. El mismo Pinochet ocuparía el primer mandato de ocho años, al cabo del cual se realizaría un plebiscito para ratificar (o rechazar) al candidato de los militares (llegado el momento, el propio Pinochet, como era predecible) para un segundo mandato (1989-1997). Sólo entonces se podría llamar a elecciones parlamentarias —junto con elecciones presidenciales en caso de que la votación por el «no» ganara el plebiscito—.

Al igual que en 1925, fue necesario realizar un plebiscito para dar a la Constitución un baño de legitimidad. El país se vio inundado por la propaganda, pero sólo de un lado. Quienes se oponían a la Constitución (el ex presidente Frei era el más elocuente) no tuvieron prácticamente ninguna oportunidad para hacer su campaña. Llegado el día (11 de septiembre de 1980), más de seis millones de chilenos votaron. En esas circunstancias, no es muy fácil determinar si el resultado (67% a favor, 30% en contra) era una expresión indiscutiblemente limpia de la voluntad popular. Seis meses después (el 11 de marzo de 1981), Pinochet comenzó su mandato de ocho años. En un gesto sumamente simbólico, trasladó su oficina al palacio de La Moneda, para entonces completamente restaurado.

LA VÍA CHILENA HACIA EL CAPITALISMO

Cuando tomaron el poder, los generales no sabían prácticamente nada de economía. Tenían que estabilizar y reactivar una economía muy caótica y necesitaban consejo urgente.

Ciertos economistas estaban deseosos de darlo. Habían salido de la Universidad Católica y, algunos de ellos, del Departamento de economía de la Universidad de Chicago —sede principal de la nueva y floreciente ortodoxia del «monetarismo» y del *laissez-faire* sin restricciones—. La figura clave de este grupo fue Sergio De Castro, el duro decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad católica. Al hacerse conocidos —lo que ocurrió pronto—, estos economistas chilenos «neoliberales» fueron apodados «los *Chicago Boys*». El nuevo régimen los colocó en cargos oficiales y un grupo importante entró en ODEPLAN, la oficina de planificación del Estado. Los efectos de su asesoría en materia de política económica fueron inmediatos: en octubre de 1973, se abolieron casi todos los controles de precios y el escudo fue devaluado (de 50 a 250 por dólar) con una tasa cambiaria única y unificada.

No obstante, los *Chicago Boys* no consiguieron una victoria fácil. En un momento de precios en fuerte alza y creciente desempleo, su austera visión de un capitalismo sin restricciones era considerada demasiado arriesgada por muchos militares y dirigentes empresariales. En 1974, por otra parte, Chile comenzó a sentir los efectos de la devastadora recesión internacional producida por la «primera crisis del petróleo» —los precios del petróleo se cuadruplicaron tras la guerra árabe-israelí de octubre de 1973—. A mediados del 1974, el precio del cobre comenzó a bajar de manera alarmante. Además, a pesar de los esfuerzos iniciales del régimen, la inflación parecía seguir fuera de control. Esas dificultades cada vez mayores coincidían con la consolidación del poder personal de Pinochet. Fue precisamente entonces (marzo de 1975) cuando el *gurrí* norteamericano del monetarismo, el profesor Milton Friedman, consideró adecuado visitar Chile: habló con Pinochet, recalcando la necesidad de un «tratamiento de choque» para eliminar la inflación. En abril de 1975, Pinochet mandó a paseo la cautela y se inclinó de manera decisiva en favor de los *Chicago Boys*, confiriendo poderes extraordinarios a Jorge Cauas (su ministro de Hacienda desde julio de 1974) y nombrando a Sergio De Castro como ministro de Economía. De Castro tomó el cargo de ministro de Hacienda cuando Cauas renunció en diciembre de 1976.

Los *Chicago Boys* quedaron entonces completamente a sus anchas. Su energía y dogmatismo no los hizo universalmente populares. Sacaron el máximo provecho de su alianza con Pinochet, dirigiendo magistralmente la reconstrucción económica más sustancial de Chile en el siglo xx. Sus objetivos eran utópicos y exhaustivos. Querían revertir por completo la línea de intervencionismo estatal que se había desarrollado en Chile desde la década de 1920, a la cual culpaban (con razón o sin ella) de haber detenido el crecimiento económico. Éste podía garantizarse, sostenían, abriendo la economía e incentivando las «ventajas comparativas» del país en los mercados de exportación. Para conseguir estos objetivos, era preciso imponer a toda la sociedad un sistema de mercado; una nueva cultura empresarial reemplazaría a la habitual dependencia estatal; el Estado mismo debía confinarse desde entonces a su clásico papel de «sereno».

Causa aplicó inmediatamente el «tratamiento de choque». El gasto fiscal fue reducido en más de un 25%; el volumen de circulante, controlado férreamente; y las tasas de interés, más que triplicadas. Y ocurrió lo que era predecible: una profunda recesión con una tasa de desempleo que aumentó en casi el 20% (y los salarios reales en una bajada de hasta el 60% respecto de su monto en 1970). A finales de 1975, el PIB había disminuido alrededor de un 15%; la producción industrial, un 25%. Las inevitables penurias económicas llevaron al régimen a instituir un Programa de Empleo Mínimo (PEM) con un salario bajo: en 1976, financiaba a 200.000 hombres que trabajaban en la pavimentación de carreteras y otras labores similares.

A pesar de la recesión, el programa neoliberal siguió adelante con gran celo durante los siete años siguientes. Se aceleró la privatización de las más de 400 compañías pertenecientes al Estado, controladas por el Estado o «intervinidas» (iniciada en 1974), aunque un núcleo duro de grandes empresas «estratégicas» (muchas de ellas dirigidas ahora con eficiencia por militares) permanecieron en el sector público —el cual, diez años después del golpe de estado, aún era más grande de lo que lo había sido en la época del presidente Frei—. Mientras tanto, los derechos de importación bajaron de un promedio del 70% en 1974, a un 10% prácticamente igual para todos los artículos a finales de la década —con consecuencias bastante predecibles para la industria chilena, cuya participación en el PIB cayó en un 20% entre 1975 y 1982—. También se aprobó una legislación muy liberal para las inversiones extranjeras (1974, 1977). El sistema tributario fue renovado, con la introducción de un impuesto al valor añadido de estilo europeo (el IVA), entre otras cosas. En 1975, se reformó la moneda: 1.000 escudos se convirtieron en un peso (un millón de los pesos abolidos en 1960). En junio de 1979, en parte para neutralizar la inflación «importada», De Castro instituyó una tasa cambiaria fija de 39 pesos por dólar.

En el campo, el impacto neoliberal fue avasallador. La reforma agraria había sido detenida de golpe. El gasto del gobierno en la agricultura fue cercenado. El personal del Ministerio de Agricultura (incluidos organismos como la CORA y el INDAP) fue reducido de 27.000 funcionarios en 1973 a 5.000 en 1980. Prácticamente un tercio de toda la tierra agrícola del «sector reformado» fue devuelta a sus antiguos dueños, alrededor de la mitad fue dividida en parcelas que se entregaron a los campesinos (aunque de ninguna manera a todos ellos) y la mayor parte del resto fue rematada por la CORA. En 1979, una nueva ley incentivó a los mapuches para que subdividieran sus tierras comunitarias en parcelas privadas. Casi un tercio de las aproximadamente 3.000 comunidades habían hecho eso mismo en las décadas de 1930 y 1940. Estas diversas medidas, sin embargo, no propiciaron la restauración de la hacienda tradicional. Rápidamente, la unidad agraria fundamental pasó a ser «el campo», con importantes inversiones en capital y una explotación intensiva con fines comerciales, generalmente dedicada al mercado de exportación (la ubicación de Chile en el hemisferio Sur le permitía una vez más desempeñar el papel que ya habíamos

señalado en relación con los auges del trigo del siglo XIX). Por otra parte, surgieron también las plantaciones de pinos en el sur, generosamente subsidiadas por el Estado. Si bien algunos campesinos lograron sobrevivir en este nuevo medio impresionante, otros (alrededor de un tercio de los beneficiarios originales de comienzos de la década de 1980) vendieron sus parcelas y, a veces, se trasladaron a las nuevas poblaciones rurales. Los nuevos «agronegocios» no ofrecían en modo alguno el paternalismo de la vieja hacienda, ni tampoco muchos trabajos estables. Por ende, la nueva y dinámica agricultura chilena tuvo como coste una intensificación de la pobreza rural —los pobres pasaron a ser las víctimas de la modernización capitalista más que de la inercia y la jerarquía del pasado—.

En términos económicos convencionales, esta dura «reestructuración» neoliberal parecía dar frutos. La inflación cayó de tres dígitos a dos y finalmente a uno (9,5% en 1981). La economía comenzó a salir de la recesión de 1975-1976, con un alza en el PIB del 7% promedio anual entre 1976 y 1981. Impulsado por un nuevo organismo de promoción de las exportaciones (Pro-Chile, 1974) —no completamente aprobado por los puristas neoliberales—, el crecimiento de las exportaciones «no tradicionales» (de los cultivos y bosques) resultó especialmente impresionante. Las manzanas chilenas aparecieron en los supermercados ingleses; algunos vinos chilenos de buena calidad, en las bodegas norteamericanas. A mediados de la década de 1990, las acciones de una de las viñas tradicionales clásicas, Concha y Toro⁷, estaban siendo cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Si en la década de 1960 el cobre representaba alrededor del 90% del total de las exportaciones (en promedios anuales); en la década de 1980, alcanzaba menos del 50%.

Las privatizaciones de la década de 1970, en la ciudad y en el campo, proporcionaron excelentes oportunidades a los conglomerados financieros tanto antiguos como nuevos (y especialmente a estos últimos) para construir grandes imperios empresariales en condiciones muy favorables (con efectos equivalentes a los que habría tenido un subsidio estatal). A finales de la década, unos cuantos de esos «grupos económicos» controlaban gran parte del sistema bancario y de las nuevas «financieras» (empresas de finanzas no reguladas) y, a través de sus numerosas compañías asociadas, una fracción cada vez mayor de los sectores manufacturero y agroexportador. Gracias a la recolocación de los capitales provenientes de los bancos europeos y norteamericanos tras la primera crisis del petróleo, los conglomerados solicitaron préstamos externos en gran cantidad y usaron el dinero para comprar compañías y hacer préstamos a su vez (por lo general a sus propios asociados) a las tasas locales, que eran mucho más altas. Se produjo entonces un *boom* en la construcción, alimentado por la facilidad para obtener créditos de consumo: en 1979, apareció en escena la primera tarjeta de crédito de Chile. El país pronto se vio inun-

⁷ El nombre dio origen a un verbo reflexivo muy coloquial en Chile: «concha-y-torearse».

dado por bienes extranjeros: televisores y radios japonesas, automóviles coreanos (la cantidad de vehículos en Chile se triplicó entre 1975 y 1982), perfumes franceses y whisky escocés. Todo esto creó la poderosa ilusión de una nueva prosperidad. A pesar de la colosal deuda externa (en su mayor parte privada y por un monto de 17.000 millones de dólares en 1982), se respiraba mucho optimismo. Chile, se nos decía, se convertiría en el próximo Taiwan o Corea del Sur. En agosto de 1980, el ministro del Trabajo, José Piñera, declaró: «en 1990 Chile será un país desarrollado»⁸.

Dos años después, la economía chilena simplemente implosionó, cayendo en una recesión incluso peor que la de 1975-1976. Primero se produjo otro fuerte aumento en el precio del petróleo (la «segunda crisis del petróleo», en 1979). Una vez más la economía mundial se hundió, lo que significaba una disminución en la demanda de exportaciones chilenas —a estas alturas, menos competitivas por la tasa cambiaria fija, que sobrevaloraba el peso y producía serios problemas en la balanza de pagos—. Las tasas de interés internacionales se elevaron, dado que los Estados Unidos y Gran Bretaña también estaban adoptando duras estrategias neoliberales. En esta nueva encrucijada, los dos principales conglomerados recién establecidos, Vial (BHC) y Cruzat-Larraín, cuyo crédito internacional se hizo humo, quedaron enterrados para siempre bajo una montaña de deudas impagadas por los asociados que las habían adquirido con tanta premura. Las bancarrotas sumaron más de 800 en 1982 (habiendo alcanzado alrededor de un tercio de esa cifra entre 1977 y 1981). El PIB disminuyó en un 15%; la fuerza de trabajo industrial se redujo en un 20% y el desempleo se elevó por encima de su volumen de 1975-1976. A comienzos de 1983, más de medio millón de hombres se encontraban empleados en el PEM y en un segundo programa de emergencia, el POJH (Programa Ocupacional para Jefes de Hogar). Tanto los industriales como los agricultores clamaron pidiendo protección: sus organizaciones, hasta entonces menospreciadas por los *Chicago Boys*, tendrían que ser escuchadas con mayor atención en el futuro.

A mediados de 1982, De Castro se retiró del Ministerio de Hacienda y la tasa cambiaria fija que había establecido fue abandonada cuando el propio Pinochet le dijo lisa y llanamente a su nuevo ministro: «He resuelto devaluar». Otras dos devaluaciones bajaron el valor del peso en un 88%. A los deudores en moneda dura, se les asignó un dólar preferencial para amortiguar los efectos de esta medida. A comienzos de 1983, con el sistema bancario próximo a la quiebra, el régimen asumió directamente el control de los diez bancos y financieras, liquidó tres de partida y el Banco Central asumió sus deudas. Después de dos años —y no menos de cuatro ministros de Hacienda—, una nueva política económica comenzó a tomar forma. En febrero de 1985, Pinochet nombró en dicha cartera a Hernán Büchi (36 años). El hecho de que hubiera realizado sus estudios de pos-

⁸ Citado en Arturo Fontaine A., *Los economistas y el presidente Pinochet*, 1988, pág. 140.

grado en Columbia y no en Chicago, y de que éstos hubieran sido en comercio y no en economía, no pasó inadvertido. Con su pelo largo y el entusiasmo con que trota y anda en bicicleta, Büchi difícilmente tenía la apariencia de un ministro de Hacienda; sin embargo, él, más que ningún otro, simbolizaba el inteligente pragmatismo que ahora reemplazaba la versión anterior y fundamentalista del neoliberalismo.

El nuevo pragmatismo se basaba en el cuidadoso manejo de la tasa cambiaria y el volumen de circulante, aunque también (en parte para controlar las importaciones) se autorizaron algunas medidas selectivas para beneficiar a la agricultura y a la industria orientadas al mercado interno, así como a los exportadores que ya habían sido tan favorecidos. Los aranceles de importación fueron fijados a niveles un poco más altos que los de 1980 y se volvieron a introducir sobretasas para algunos artículos específicos, mientras los componentes fabricados en Chile para la industria de exportación quedaban exentos de IVA. Esta mezcla de «sustitución de las importaciones» limitada y promoción de las exportaciones espoleó a las industrias y los talleres chilenos —así como a los campos del Valle Central y los bosques de pinos del sur cada vez más numerosos—. Esto ayudó a impulsar al país en una nueva etapa de sólido crecimiento iniciada a mediados de 1980, que afectó inevitablemente las tasas salariales y de empleo (y probablemente también la política). A pesar de lo anterior, la estructura neoliberal general seguía manteniéndose y se fortalecía. Durante la década de 1980, la mayoría de los programas nacionales de pensiones fueron transferidos a compañías privadas, conocidas como AFPs (Administradoras de Fondos de Pensión). Después de 1985, además, algunas empresas estatales «estratégicas» —incluida la CAP (acero) y SOQUIMICH (salitre y químicos)— fueron vendidas en una nueva ronda de privatizaciones. En algunos de estos casos, los trabajadores adquirieron un tercio del patrimonio. No obstante, incluso después de lo anterior, el sector público seguía conservando un conjunto de grandes corporaciones, incluida la ENAP (petróleo) y la enorme corporación del cobre, CODELCO.

Había llegado ahora el momento de reunir esfuerzos para atajar la gigantesca deuda externa. Esto dio algunos frutos: en términos de porcentaje respecto del PNB, ésta disminuyó del 143% en 1985 al 74% en 1990. En 1970, era un mero 8% del PNB. En esta área, Chile fue uno de los pioneros en el innovador uso de la conversión de la deuda en capital (los inversores extranjeros compraban las deudas, se las vendían al Banco Central y usaban las utilidades para comprar acciones de compañías chilenas o hacer nuevas inversiones). La inversión extranjera directa, que había sido bastante menor hasta entonces, también experimentó un fuerte aumento desde 1985 (alrededor del 40% provenía de los Estados Unidos y gran parte se utilizó con fines productivos —a diferencia de lo que había ocurrido con los préstamos especulativos de fines de la década de 1970—). La Escondida, una nueva mina de cobre de grandes proporciones y perteneciente a multinacionales norteamericanas, europeas y japonesas, comenzó a producir en 1990, con planes de crecimiento

para alcanzar un volumen similar a El Teniente. Proyectos como éstos hicieron que Chile pareciera con un perfil muy positivo en la prensa empresarial internacional. Para otros países de América Latina, atrapados en recesiones que ya duraban toda una década (como lo estaba la mayoría), el «modelo chileno» parecía sumamente atractivo a comienzos de la década de 1990.

Los efectos que la revolución económica neoliberal tuvo en la sociedad chilena han sido muy discutidos y continuarán siéndolo. Como hemos visto, el crecimiento económico que se produjo desde mediados de la década de 1980 tuvo un alto coste: dos graves recesiones y una tasa de desempleo que siguió siendo alta hasta el final del período. La pobreza urbana y rural sin duda empeoró durante esos años. Para quienes disfrutaban de un empleo permanente, los sueldos reales de 1990 probablemente eran tan sólo levemente mejores que los de hacía veinte años, aunque una vez más estaban mejorando en forma sostenida con el renovado crecimiento económico. La distribución de los ingresos se había vuelto sumamente dispar: gran parte de los beneficios del crecimiento eran acumulados por los más adinerados, mientras que el 40 % más pobre de la población y algunos sectores de la clase media (burócratas y profesores de escuela cesantes, o quienes estaban atrapados en una espiral de deudas) tenían que vérselas con niveles de vida estáticos o en descenso.

No es que el régimen militar hubiera olvidado a los pobres (aunque algunos de quienes lo apoyaban, sí lo hicieron). De hecho, los pobres más pobres (quienes estaban en la «extrema pobreza») fueron una preocupación permanente de su equipo de planificación en ODEPLAN. A fines de la década de 1980, el régimen podía mostrar con justificado orgullo significativas mejoras en las viviendas de bajo costo, el alcantarillado, la pavimentación, el suministro de agua potable, las expectativas de vida (65 años en 1973, 72 en 1990), la nutrición y la mortalidad infantiles (en 1970, Chile tenía una de las tasas más altas de América Latina; en 1990, tenía la más baja). Sin embargo, en otras áreas, el proyecto económico del régimen era socialmente perjudicial. La creación de numerosos programas de salud privada (desde 1981), las ISAPRES (Institutos de Salud Previsional), tendía a beneficiar a una minoría, aunque creciente: el total de afiliados alcanzaba 1,5 millones en 1989 e iba en aumento (para cubrir alrededor del 25% de la población en 1994). Otros chilenos (especialmente los desempleados, los enfermos y los ancianos) corrían peor suerte. El gasto en los servicios de salud estatales (regionalizados en la década de 1980) fue reducido, al igual que los niveles de atención médica y servicios hospitalarios. Es posible que la descentralización de los servicios sociales (y de la educación estatal), los cuales pasaron a manos de las municipalidades en 1981, haya reducido significativamente la burocracia, pero las municipalidades más pobres no estaban en condiciones de soportar esta nueva carga.

Además, la «reestructuración» neoliberal alteró considerablemente los esquemas de empleo tradicionales. La elevada tasa de desempleo, por sí misma, tuvo efectos muy evi-

dentés en la vida e ingresos familiares. A finales de la década de 1980, entre el 30% y el 40% de la población activa realizaba trabajos «informales», incluida la venta callejera y el servicio doméstico. Debido a una difundida práctica de subcontratación (utilizada por la industria, el campo y el mismo Estado), el empleo pasó a ser a menudo a plazo fijo o temporal —el caso más representativo es el de la recolección y empaquetado de fruta, que en la década de 1980 atrajo a miles de hombres y mujeres tanto de las ciudades como del campo—. En el campo, los trabajadores temporeros superaban a aquellos en trabajos estables por seis a uno. En las poblaciones, los masivos grupos comunales (a menudo asistidos por la Iglesia católica y por lo general dirigidos por mujeres) organizaron la producción y venta de artículos artesanales, incluidas las hermosas «arpilleras», exhibidas después en todo el mundo. Quienes no lograron insertarse en estas estrategias de supervivencia y tampoco encontraban otra salida a sus miserias, se refugiaron en el alcohol o en las ahora florecientes iglesias protestantes (en su mayor parte pentecostales)⁹; en 1985, se estimaba que alrededor del 20% de la población era protestante.

A pesar de la enorme cara oculta de la pobreza, muchos chilenos se adaptaron —y prosperaron— en el nuevo clima económico. Una nueva raza de empresarios rudos y modernos (a menudo más bien prosaicos) ocuparon su lugar junto a la generación más antigua. Los «yuppies» chilenos abundaban. Los conglomerados nuevos (y antiguos), con bases más sólidas que los de Vial o Cruzat-Larraín, crecieron de manera impresionante en la década de 1980. Las empresas más antiguas y establecidas, afectadas por las dos recesiones, se mostraron deseosas de competir con éxito en los mercados internos y, cada vez más, en los externos. Confiados en sus propias capacidades, los empresarios comenzaron a considerarse a ellos mismos como puntales de la sociedad. Por su parte, y a una escala más modesta, la «revolución informática», aceptada con entusiasmo por las empresas chilenas, ofrecía nuevas oportunidades a miles de especialistas en ordenadores bien preparados. Los cursos de ingeniería comercial, derecho comercial y contabilidad proliferaron en una serie de nuevas universidades e institutos profesionales privados.

Los tecnócratas neoliberales probablemente no planearon un profundo cambio en la cultura nacional. La encuesta de opinión realizada por Carlos Huneeus en 1986 muestra que, mientras los bancos y conglomerados eran poco apreciados por los entrevistados, los negocios pequeños y medianos eran muy bien mirados, si bien una mayoría expresaba su deseo de que la economía fuera mixta más que completamente privatizada¹⁰. Los propietarios de las exitosas pequeñas empresas que se acababan de formar, los trabaja-

⁹ En Chile constituye prácticamente una segunda Iglesia oficial (fundada en 1910), que no está vinculada, como otras iglesias protestantes en América Central, a las sectas fundamentalistas de Estados Unidos, aunque algunas de éstas también tienen iglesias hermanas en Chile.

¹⁰ Carlos Huneeus, *Los chilenos y la política*, 1987, págs. 116-120.

dores que poseían acciones de las corporaciones recién privatizadas, los campesinos que cultivaban porotos para la exportación o verduras para el mercado de Santiago –todos ellos, quizá– sentían un creciente apego por la economía de mercado. Incluso parte de quienes trabajaban en el amplio sector «informal» podían verse a sí mismos a veces como pequeños empresarios.

Los autores Joaquín Lavín y Luis Larraín afirmaban en 1989 que Chile se había convertido en «una sociedad más eficiente [...], más humana, más informada, más culta»¹¹. Se referían a los modernos ejecutivos de las empresas, a los centros comerciales de Santiago oriente, a los supermercados y a la pavimentación de las poblaciones, a los cursos de informática, a la diversidad de expresiones culturales, a la enorme variedad de bienes de consumo en las tiendas, al crecimiento de las exportaciones industriales –esos eran, afirmaban, los signos indiscutibles de una nueva sociedad emergente, de una sociedad moderna–. Mucho de lo que decían era bastante cierto. Había múltiples huellas materiales de modernización en el Chile de 1989. No obstante, una mirada diferente y menos benigna también habría reparado, ese año, no sólo en la evidente persistencia de la pobreza, sino también en cierta atomización social, en la trivialización al estilo americano de los medios de comunicación masivos, en cierta tendencia a un consumismo más bien insensato. Algo que ningún visitante podía dejar de notar en 1989 era el hecho de que, entre otros signos de deterioro ambiental, el *smog* de Santiago era uno de los más nocivos del hemisferio Sur –producto, por una parte, del enorme aumento en la cantidad de automóviles (cerca de 1,5 millones en Chile a mediados de la década de 1990) y, por otra, de un aumento descontrolado en la cifra total de autobuses, en una ciudad que, para entonces, alcanzaba los cuatro millones de habitantes¹²–. A su modo, éste era un símbolo elocuente de «desregulación». En resumen, el gobierno de Pinochet construyó sólidas bases para los gobiernos futuros, pero también dejó muchas cosas por enmendar. ¿Pero a quién le correspondía hacerlo?

LA RENOVACIÓN DE LA POLÍTICA

Entre las secuelas de la crisis económica de 1982-1983, hay que señalar el surgimiento de una seria oposición al régimen de Pinochet, la cual fue desatada por el movimiento obrero. Tras 1973, con la antigua CUT disuelta, los sindicatos del comercio se habían visto seriamente impedidos tanto por la represión como por una serie de nuevas restric-

¹¹ Joaquín Lavín y Luis Larraín, *Chile, sociedad emergente*, 1989, pág. 17.

¹² A finales de la década de 1980, Santiago se ufñaba de contar con tantos autobuses como Buenos Aires, ciudad tres veces más grande.

ciones. En 1979, el régimen introdujo su propio Código laboral (Plan Laboral), que limitaba mucho el radio de acción de los sindicatos. Su afiliación disminuyó prácticamente a la mitad entre 1973 y 1983. Aún así, como observó Alan Angell «la conciencia política y de clase no podía ser abolida por decreto»¹³ y la resistencia al régimen por parte de los trabajadores nunca cesó. A comienzos de la década de 1980, varios dirigentes sindicales se estaban haciendo conocidos a escala nacional por su postura independiente –especialmente Manuel Bustos entre los trabajadores textiles, Rodolfo Seguel entre los mineros del cobre y Tucapel Jiménez, el más antiguo, dirigente del sindicato de empleados públicos (ANEP), quien antes había apoyado al régimen–. Claramente, la creciente popularidad de Jiménez fue vista como una amenaza: en febrero de 1982, fue brutalmente asesinado por la CNI y su cuerpo abandonado en un taxi. Rodolfo Seguel («el Lech Walesa chileno», como algunos lo llamaron) tomó la iniciativa en su lugar y convocó a una huelga general de un día para el 11 de mayo de 1983. Para sorpresa de Seguel, la huelga tuvo un amplio apoyo. Santiago quedó paralizado: el sonido de los bocinazos y el golpeteo de las cacerolas mostraron que la oposición militante había vuelto a las calles de Chile. Durante los tres años siguientes, hubo aproximadamente más de veinte días de estas «protestas», con huelgas, demostraciones y peleas a la carrera con la policía.

Aunque la iniciativa de las primeras y pocas protestas provenía de los sindicatos, ésta muy pronto pasó a los partidos que ya habían comenzado a revivir. Seguel, como demócrata-cristiano, así lo quería. Tal como declaró en julio de 1983, era el deber de los partidos «asumir el papel que les corresponde en esta sociedad [...], [y] encontrar el punto en el que están de acuerdo y presentarle al pueblo un proyecto»¹⁴. Ni los sindicatos (que tenían sus propias peleas que dar) ni las aproximadamente mil organizaciones de base de las poblaciones podían articular fácilmente ese necesario «proyecto» nacional.

A pesar de que los partidos habían visto interrumpido su funcionamiento durante los diez años anteriores, nunca desaparecieron. El Partido Nacional se había desbandado patrióticamente tras el golpe y sus miembros, desde entonces, apoyaban al régimen. Los comunistas, a pesar de haber sufrido una dura represión, sabían cómo sobrevivir en la clandestinidad. En 1980, alejándose radicalmente de su histórica línea «pacífica» e inspirándose en parte en las revoluciones de Nicaragua e Irán, el Partido comenzó a desarrollar una táctica de insurrección masiva: su nuevo grupo de guerrilla urbana, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), había comenzado a ejecutar acciones terroristas menores –los rodriguistas tenían especial debilidad por los atentados contra los postes del alumbrado eléctrico y por los cortes de energía eléctrica–. Las redes nacionales del Partido Socialista habían sido mucho más desarticuladas por la represión. Sus divisiones

¹³ *Cambridge History of Latin America*, ed. por Leslie Bethell, vol. VIII, Cambridge, 1991, pág. 371.

¹⁴ Eugenio Alameda et al., *Chile, la memoria prohibida*, vol. III, pág. 515.

internas se habían multiplicado, especialmente entre los exiliados, cuyos debates eran interminables. A comienzos de la década de 1980, se estaban consolidando sus dos facciones principales: primero, los socialistas retrógrados que aspiraban a reeditar todo el programa allendista y, segundo, los llamados «socialistas renovados» (influidos por la Socialdemocracia europea), para quienes el asociarse con los demócrata-cristianos ya no era del todo impensable. El mismo PDC, brevemente desorientado por la muerte de su héroe, Eduardo Frei (en enero de 1982), cobró nuevas fuerzas bajo la dirección de un nuevo presidente, el activo y fluido Gabriel Valdés. Sus técnicas incluían distribuir masivamente a los grupos locales de partidarios del PDC casetes concebidas para subirles la moral.

Junto con la aparición de las primeras protestas, se formaron dos coaliciones principales organizadas en torno a algunos partidos (agosto-septiembre de 1983). La primera, la Alianza Democrática, tenía por núcleo el PDC, la llamada «Derecha republicana» (los derechistas que comenzaban a distanciarse del régimen) y los «socialistas renovados», y contaba además con un asombrosa cantidad de grupos más pequeños—algunos antiguos (como los radicales), otros nuevos (como los humanistas)—. El Partido Comunista, excluido de la Alianza, formó su propio Movimiento Democrático del Pueblo (MDP), junto a la otra facción importante de los socialistas (los «socialistas de Almeyda») y lo poco que quedaba del MIR.

La movilización masiva de 1983-1986, sin duda, desconcertó al régimen. Como era de esperar, su respuesta fue la represión: cada protesta traía su propia cuota de muertos, heridos y arrestados. A finales de 1984, la policía y las tropas montaron una serie de brutales incursiones en las poblaciones. Por iniciativa del cardenal arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, once partidos (casi todo el espectro menos los comunistas) firmaron en agosto de 1985 un «Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia»—un consenso mínimo en favor de las elecciones libres, del restablecimiento de un régimen amparado por la ley y del reconocimiento de que la economía chilena debía ser «mixta»—. Pinochet no podía hacer nada frente a este acuerdo. En la víspera de Navidad de 1985 le dijo lisa y llanamente al cardenal que no se metiera en política. El capitán general había celebrado hacía poco su cumpleaños número setenta y estaba en excelente forma física, lo que recordó a los chilenos en un corto de televisión donde aparecía haciendo sus legendarios ejercicios matutinos.

El último número del periódico de oposición *Fortín Mapocho* (1985) publicó un titular en letras enormes: *EL DEBE IRSE EN EL 86*. Pero no lo hizo. A pesar de las demostraciones en las calles y en las sedes universitarias, Pinochet estaba decidido a seguir su calendario personal: la victoria en el plebiscito de 1988 y un segundo mandato hasta 1997. En septiembre de 1986, sobrevivió a un serio intento de asesinato (organizado por los rodriguistas). Su escape providencial y en gran medida también la economía finalmente revitalizada, sirvieron para fortalecer su posición. La oposición (o la mayoría de ella)

comenzaba lentamente a caer en la cuenta, con cierta reticencia, de que la única táctica práctica que le quedaba era trabajar dentro del marco de la odiada Constitución de 1980. La proposición de que había que tratar la Constitución como «un hecho» fue enunciada por primera vez en 1984 por Patricio Aylwin. En agosto de 1987, cuando éste volvió a hacerse cargo de la presidencia de su partido, sucediendo a Valdés, había muchas más personas preparadas para reconocer el «hecho»—aunque sólo fuera porque el propio régimen había comenzado a preparar activamente el plebiscito—.

Entre febrero y marzo de 1987, se abrieron los nuevos registros electorales y, a los partidos políticos no marxistas, se les permitió volver a constituirse con la condición de que reunieran 33 500 firmas de votantes registrados (a nivel nacional). Ése fue el momento de la verdad para la oposición. El nuevo y joven Partido Humanista (versión local de los partidos verdes de Europa Occidental) fue el primero en comenzar su campaña de registro. El PDC y otros partidos pronto se le sumaron. En agosto de 1988, más del 90% de los votantes calificados estaban registrados. Para los socialistas y otros izquierdistas excluidos del sistema, se creó oportunamente un partido funcional, el PPD («Partido por la Democracia»), que después desarrollaría una identidad propia. Finalmente, la derecha también volvió a entrar en la arena política, aunque en un estado de cierta confusión. A la larga, dividió sus fuerzas entre la tradicional y conservadora Renovación Nacional (RN), descendiente del antiguo Partido Nacional, y la tecnocrática y neoliberal Unión Demócrata Independiente (UDI), encabezada por Jaime Guzmán, ex-dirigente estudiantil gremialista, y uno de los más cercanos asesores de Pinochet durante años.

La Concertación de Partidos por el No¹⁵, formada en febrero de 1988, reunió a más de quince partidos y movimientos (sin incluir a los comunistas) en un esfuerzo mancomunado con el fin de ganar la votación por el No en el próximo plebiscito. Al igual que los liberales y conservadores de la década de 1950, los grandes batallones de la Concertación, el PDC y los socialistas (que se volvieron a unir en otro partido en diciembre de 1989), se condujeron como antiguos adversarios capaces de superar sus diferencias para luchar contra un enemigo común. Asimismo, algunos demócrata-cristianos y socialistas (otra vez el paralelo con la Fusión Liberal Conservadora resulta interesante) concebían la Concertación como una coalición de gobierno a largo plazo para llevar al país a una nueva etapa: la redemocratización, una amplia aceptación de la economía de mercado y un énfasis renovado en la justicia social.

Sin embargo, el electorado recién registrado tenía que ser persuadido antes que nada para negarle a Pinochet un segundo mandato. La campaña por el No bordeó la

¹⁵ No existe una buena traducción al inglés del término «Concertación». En realidad, significa «concierto» como en el «Concierto de Europa». N. del E.: aunque en una traducción española esta nota de los autores carece de sentido, optamos por conservarla por respeto a su celo profesional.

genialidad. Hizo a un lado el acoso de las autoridades -2.000 arrestos políticos en el primer semestre de 1988-. Utilizó las herramientas que los nuevos tiempos le ofrecían: recurrió a grupos de estudio, y a ordenadores y faxes para controlar la votación¹⁶. Consciente de que había al menos 3 millones de aparatos de televisión en Chile, utilizó de manera brillante los quince minutos de transmisión televisiva concedidos a regañadientes por el régimen. La votación se realizó el 5 de octubre de 1988. El No ganó el 54% de los votos; el Sí, el 43% (votó el 97% de la población registrada, el 92% de todos quienes estaban calificados). Fue un momento de inolvidable euforia para la Concertación.

El resultado enfureció a Pinochet. Mucho tiempo antes, otro plebiscito, señaló después, había elegido a Barrabás (¿qué tenía que ver esto con él?). No obstante, dejó claro que iba a cumplir su calendario y que se llevarían a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias como correspondía (según la Constitución de 1980). Éstas se fijaron para diciembre de 1989. La Concertación, llena de energías gracias a su éxito, estaba lista para generar una lista de candidatos común para el Congreso y elegir un presidente. Que el candidato fuera del PDC era inevitable, así como lo había sido el candidato radical para el Frente Popular en 1938. Para disgusto del resto de la Concertación, el propio PDC condujo una dura batalla interna antes de decidirse: Gabriel Valdés quería la designación, al igual que la estrella ascendente de la joven generación, Eduardo Frei, hijo homónimo del anterior presidente y un exitoso ingeniero y empresario. Sin embargo, Valdés finalmente se retiró manifestándose públicamente a favor del candidato evidente, Patricio Aylwin, cuya importancia se había visto muy fortalecida por su papel como portavoz oficial de la Concertación durante la campaña del plebiscito. Renovación Nacional y la UDI eligieron a Hernán Büchi, confiando en que su estilo de vida poco convencional podría ser atractivo. Un tercer candidato entró a la lid. Se trataba del millonario «populista» Francisco Javier («Fra Fra») Errázuriz, cuyos motivos para postularse no estaban del todo claros -quizá se debiera simplemente a que, después de todo, era un Errázuriz-. Se autoproclamó un «hombre de centro», lo cual no era.

En el año que iba entre el plebiscito y la elección, la Concertación se dedicó a conseguir una serie de enmiendas a la Constitución de 1980. En este esfuerzo fue apoyada por la positiva actitud de Renovación Nacional (y de su joven dirigente Andrés Allamand) y por el hábil manejo del último ministro del Interior de Pinochet, Carlos Cáceres, quien creía que el capitán general ganaría en honorabilidad con una estricta observancia de su

¹⁶ La oposición también aprovechó los aproximadamente dos millones de dólares que le dio la Administración de Reagan. Se ha dicho que una de las razones para esta generosidad habría sido que dicha Administración, obsesionada en la década de 1980 con derrocar el régimen revolucionario de Nicaragua, quería aparecer como equilibrada en sus tratos con América Latina. Para un estudio de la política norteamericana hacia Chile desde la década de 1960 a la de 1990, ver Paul Sigmund, *The United States and Democracy in Chile*, Baltimore, 1993.

propia Constitución. La Concertación no consiguió todo lo que quería, pero de todas maneras se acordó a la larga un paquete de enmiendas y éste fue aprobado (por el 86% de los siete millones de votantes) en un plebiscito que se llevó a cabo en julio de 1989. Dicho paquete incluía el fin de la prohibición de los partidos que estaban «contra la familia» o en favor de la «lucha de clases» (Artículo 8), el aumento de la proporción de senadores elegidos, la simplificación de los procedimientos para la enmienda constitucional y cambios en la composición del nuevo Consejo de Seguridad Nacional (originalmente dominado por los militares). Además, como medida transitoria, se limitaba el próximo periodo presidencial a cuatro años.

Pinochet también se mostró conciliador en lo que se refería a la composición del directorio del Banco Central, a partir de entonces independiente del gobierno -un antiguo sueño de los *Chicago Boys*-. No obstante, la Concertación no consiguió cambiar el nuevo sistema de elecciones «binominales»¹⁷ decretado entonces, ni detener el último conjunto de leyes -llamadas «leyes de amarre»- por medio de las cuales Pinochet quería atar de manos a los futuros gobiernos. Éstas incluían la permanencia en el cargo de los funcionarios públicos, la inamovilidad de los comandantes en jefe y algunas privatizaciones más de último minuto. Otro punto adicional era la inamovilidad del general: fuera cual fuera el resultado de la elección, él seguiría siendo el comandante en jefe del Ejército hasta 1998.

Todo esto difícilmente parecía importar. Por primera vez en casi dos décadas, los chilenos gozaban las delicias recuperadas (y completamente desconocidas para una nueva generación) de una campaña electoral presidencial. El resultado reflejó, casi con exactitud, la votación del plebiscito. Aylwin ganó el 55% de los votos, sus dos rivales de derecha consiguieron el 43% entre ambos. En las elecciones parlamentarias, la Concertación obtuvo 72 de los 120 puestos en la Cámara de Diputados y 22 de los 38 puestos de senadores elegidos.

Una de las últimas tretas de Pinochet había sido la construcción del nuevo edificio del Congreso en Valparaíso -un engendro entre neobabilónico y posmodernista frente a la terminal de autobuses-. Esto formaba parte de un antiguo acuerdo con el almirante Merino, pero, sin duda, era considerado como un medio para bajarle los humos a los egos de los políticos que tendrían que trasladar su principal foro fuera de Santiago. Esta monstruosidad arquitectónica estaba a medio construir cuando, el 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin se ciñó la banda presidencial de Chile.

¹⁷ Esto inclinó la balanza hacia la derecha, gracias a las zonas rurales y también a la norma de que, en los distritos con dos puestos, el partido ganador podía quedarse con ambos si contaba con el doble de los votos del partido perdedor.

«REENCUENTRO CON LA HISTORIA»

El septuagenario Patricio Aylwin fue el primer presidente chileno con apellido inglés —y uno muy antiguo, cuyo significado original era «amigo de los elfos» (o simplemente «buen amigo»)—. Resulta tentador compararlo (a pesar de las muchas diferencias de carácter) con el emoliente presidente del siglo XIX José Joaquín Pérez. En algunos sentidos, sus tareas eran similares; en otros, las de ahora resultaban mucho más intimidantes. La lucidez de Aylwin, su paciencia, su talento negociador, su sonrisa ligeramente irónica, constituían ventajas muy valiosas para un país que daba sus primeros pasos de vuelta a la democracia, a lo que él mismo, en su discurso televisado a todo el país en la víspera del Año Nuevo de 1990, llamó el «reencuentro» de Chile con su historia.

Las tareas del nuevo gobierno eran de tres tipos: tenía que reforzar el consenso democrático y, en particular, mantener buenas relaciones entre los civiles y los militares; debía manejar delicados asuntos relativos a los abusos de los derechos humanos cometidos tras 1973; y tenía que mantener el crecimiento económico al tiempo que se hacía cargo de las desigualdades sociales dejadas por el régimen saliente. El propio Aylwin advirtió que el progreso podía no ser rápido. Y no lo fue en todos los frentes. Aún así, Aylwin fue apoyado por una actitud constructiva generalizada de parte de los políticos (o la mayoría de ellos). Además, se encontraba bastante preparado para negociar, con los partidos de derecha que formaban la oposición, las iniciativas más contundentes (como las leyes tributarias y laborales de 1990). En el Congreso, el encanto y la autoridad de Gabriel Valdés, presidente del Senado, ayudaron a suavizar las relaciones entre los partidos. A comienzos de la década de 1990, la vida parlamentaria carecía un poco del brillo de épocas anteriores, lo cual no era de extrañar dado que ahora el Congreso estaba más restringido en sus funciones que antes de 1973. Así, el 90% de todas las leyes entre 1990 y 1994 surgieron en La Moneda. La voluntad de la Concertación de consultar a la oposición provenía en parte, sin duda, de la necesidad de reintegrar a la derecha (fuertemente inclinada a defender los logros del régimen saliente) en la corriente principal de la política, fortaleciendo así el consenso democrático. Dicho consenso puede haber parecido demasiado coactivo para algunos, pero probablemente reflejaba la voluntad general de los chilenos.

No obstante, la Concertación sabía que ciertas deudas de la historia reciente de Chile debían pagarse sin demora. En septiembre de 1990, los restos de Salvador Allende recibieron un funeral de Estado en Santiago y miles de personas saludaron el ataúd en su traslado desde Viña del Mar (donde había sido enterrado sin ceremonia el 12 de septiembre de 1973). La viuda de Allende describió el funeral como un momento de «reparación y reconciliación»¹⁸. Cinco meses antes, Aylwin había creado la Comisión de la Verdad y de

¹⁸ *El Mercurio*, 5 de septiembre de 1990.

la Reconciliación para elaborar un informe sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los años de Pinochet. Dicha Comisión estuvo presidida por el anciano ex senador radical Raúl Rettig, quien cuarenta años antes se había batido en un duelo real, aunque sin consecuencias, con Allende¹⁹. El Informe Rettig, entregado en marzo de 1991²⁰, dejó al descubierto un oscuro panorama represivo, documentando más de 2.000 muertes y criticando fuertemente al poder judicial por su anuencia durante el régimen de Pinochet —lo cual enfureció a los impenitentes jueces de la Corte Suprema, uno de los cuales fue destituido luego por el Senado (junio de 1993)—. Aylwin creó un programa de compensaciones para las víctimas de la represión, pero la cuestión específica de los juicios quedó en manos de la Corte. El avance en este ámbito fue muy lento, lo que desalentó a los grupos en favor de los derechos humanos y a las familias que habían sufrido las violaciones. A mediados de 1993, Aylwin fracasó en sacar adelante una propuesta para acelerar los juicios (que permitía el anonimato de los testigos)²¹.

Las limitaciones en este sentido eran evidentes. El Ejército estaba de vuelta en sus cuarteles, pero seguía manteniendo un alto grado de independencia con respecto al nuevo gobierno. A pesar de las esperanzas que la Concertación había puesto en la disolución de la CNI, ésta fue fusionada con el Departamento de Inteligencia del Ejército (DINE) y varios episodios (especialmente una escandalosa intervención telefónica en 1992) parecían indicar que el espionaje político seguía existiendo. Los registros de la DINA y la CNI, revelaría luego el Ejército, habían resultado destruidos en un lamentable incendio. El mismo general Pinochet se mantuvo impertérrito ante las muchas sugerencias de que debía renunciar al cargo de comandante en jefe. Escribió sus memorias (a la larga, cuatro volúmenes), que se vendieron sin demora, y sucumbió a la tentación de dárseles de lobo estrepito. Algunas investigaciones realizadas por el Congreso y la prensa sobre ciertos escándalos financieros en los cuales estaban involucrados oficiales del Ejército (y su propio yerno) lo llevaron a ordenar un acuarrelamiento general en diciembre de 1990; un alarde de poder militar que desató un breve nerviosismo en algunos políticos demasiado sensibles (y la indiferencia del público general). En mayo de 1993 rodeó el ministerio de Defensa con soldados y ordenó a los generales que visitaran ropas de combate para realizar maniobras. Éste parece no haber sido más que un pequeño (e innecesario) recordatorio para Chile de que él aún estaba allí. Aylwin manejó todas estas pullas con gran tacto y paciencia (le dijo al presidente del gobierno español Felipe González que

¹⁹ Para mayores detalles, ver Carlos Jorquera, *El Chico Allende*, 1990, págs. 284-305.

²⁰ En 1993, siguiendo una de las recomendaciones del Informe, se construyó en Santiago un monumento a las víctimas de la represión, con 4.000 nombres grabados en un muro de mármol de 30 metros.

²¹ En 1993, el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, y su principal lugarteniente, fueron juzgados y sentenciados a prisión por su participación en el Caso Letelier. Los veredictos fueron ratificados por la Corte Suprema en mayo de 1995 y luego se aplicaron las sentencias respectivas.

era como si él estuviera gobernando España con el general Franco aún con vida.) No obstante, poner demasiado énfasis en las relaciones entre el comandante en jefe y el presidente como individuos puede inducir a error. A otros niveles, las relaciones entre los civiles y los militares iban adquiriendo bases más sólidas. El Congreso, por su parte, estaba cultivando conscientemente los lazos con las fuerzas armadas. Ahora se permitía que algunos civiles estudiaran junto con los oficiales en la Academia de Guerra. No obstante, aun cuando la perspectiva de una intervención militar mayor disminuía con el tiempo, es probable que ningún gobierno chileno pudiera ignorar al Ejército en el futuro.

El fortalecimiento del consenso democrático se vio reforzado evidentemente por el éxito económico. Los objetivos económicos de la Concertación pueden resumirse en la frase «crecimiento con equidad». Su programa aceptaba la economía de mercado como una realidad (aunque suspendió las nuevas privatizaciones) y ponía énfasis en controlar la inflación así como en seguir promoviendo las exportaciones, sumando también a sus preocupaciones la «deuda social» heredada del régimen de Pinochet. Los dos últimos años del régimen militar habían sido levemente inflacionarios, con un mayor gasto fiscal utilizado para conseguir un mayor apoyo del electorado. Alejandro Foxley, el nuevo ministro de Hacienda que era conocido internacionalmente por haber criticado el modelo neoliberal, refrenó el volumen de circulante y aumentó los impuestos corporativos y el IVA, comenzando a administrar las necesarias medidas correctivas. Este ajuste implicaba un crecimiento menor que el del primer año de Aylwin, pero después, y con el Banco Central pegó con renovado vigor, con una rápida alza en las inversiones, y con el Banco Central a cargo de la modificación de la tasa cambiaria según fuera necesario. El peso se cotizaba formalmente según una «canasta» de monedas extranjeras: dólar-yen-marco alemán. A finales de 1992, año que Foxley describió como «el mejor año económico en tres décadas», Chile había gozado de ocho años de crecimiento ininterrumpido impulsado por las exportaciones. Y el crecimiento continuó en 1993 y 1994, llegando a los diez años.

Los numerosos viajes oficiales de Aylwin a países extranjeros, concebidos para restablecer las relaciones internacionales chilenas, representaban además una forma consistente de «promover las exportaciones». En 1991, Japón superó a los Estados Unidos como el país con el mayor mercado de exportaciones unitario y sus inversiones aumentaron significativamente. El gobierno japonés afirmó que Chile era el país de América Latina con el mejor coeficiente riesgo/inversión. En septiembre de 1991, Chile y México firmaron un tratado de libre comercio, que en un año duplicó el flujo entre ambas naciones. Las esperanzas a largo plazo estaban puestas ahora en un eventual acceso al proyectado Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), ratificado por el Senado de Estados Unidos a fines de 1993, y al mercado común (MERCOSUR) que entonces se estaba creando entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Tales estrategias se hicieron más necesarias que nunca a mediados de la década de 1990. El proteccionismo agrícola (espe-

cialmente en Japón y Europa) y las probabilidades de una renovada competencia desde el interior de América Latina (especialmente por parte de Argentina) constituían un desafío para quienes definían las políticas en Santiago. No obstante, los otros «modelos» parecían escasos y poco apropiados en esos tiempos. Como lo señaló en mayo de 1993 el economista jefe del ministerio de Hacienda: «O buscamos un crecimiento basado en las exportaciones o no crecemos para nada»²².

El gobierno de Aylwin no veía el crecimiento económico como un fin en sí mismo. Lentamente (quizá demasiado lentamente para algunos) comenzó a atacar la «deuda social», manteniendo algunos de los programas del régimen saliente, pero agregando también los propios. El nuevo Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), por ejemplo, encauzaba ahora su ayuda con sensibilidad y habilidad a las comunidades más pobres. El gasto social (en salud y educación) aumentó alrededor de un 30% entre 1989 y 1993, momento en el cual, según un informe de las Naciones Unidas, la cantidad de chilenos pobres había bajado del 40% al 33% de la población. A mediados de la década de 1990, había razones para afirmar que más chilenos estaban mejor alimentados, tenían mejores viviendas y gozaban de una mejor educación que nunca antes en la historia del país. No obstante, a pesar de estos signos de modernidad, el gobierno fracasó en términos de legislar a favor de una liberalización social. Se opuso, por ejemplo, a una Ley de divorcio o a eliminar las incapacidades legales que todavía afectaban a las mujeres casadas²³. De hecho, podríamos especular aquí que una de las consecuencias más inesperadas de los años de Pinochet fue cierta «reclericalización» de la sociedad: el papel de la Iglesia durante el periodo le había ganado a ésta un nuevo respeto²⁴. El antiguo componente laico, masón y librepensador de la cultura chilena (en todo su esplendor desde la década de 1880 hasta la de 1970) parecía tener mucha menor importancia en la década de 1990.

En el área laboral, la Concertación promulgó una nueva Ley (1990) para aumentar los derechos de los sindicatos del comercio y la negociación colectiva. El movimiento obrero, reunido ahora en una nueva confederación nacional (la Central Unitaria de Trabajadores, 1988), todavía tenía mucho terreno por conquistar y aún era mucho más

²² Joaquín Vial, citado en *The Financial Times*, Londres, 19 de mayo de 1993, pág. 31 (estudio sobre Chile).

²³ La pena capital, abolida en casi todos los países desarrollados, sigue existiendo en los estatutos de la nación.

²⁴ El papa Juan Pablo II visitó Chile en abril de 1987. La canonización de la primera santa chilena (Santa Teresa de Los Andes, monja carmelita ejemplar que murió en 1920 a la edad de diecinueve años) se llevó a cabo en Roma en marzo de 1993. Algunos anticlericales a la antigua habrían mostrado cierta suspicacia por el momento preciso en que se daban estos hechos. Se cree que algunos dirigentes del PDC habrían preferido la canonización de su jesuita favorito, padre Alberto Hurtado. Aunque él tampoco tendría que esperar mucho: en octubre de 1994 fue beatificado y varios miles de chilenos (incluido el presidente) viajaron a Roma para asistir a la ceremonia. Poco después, el arzobispo titular de Santiago, monseñor Carlos Oviedo recibió la investidura púrpura, convirtiéndose en el cuarto cardenal chileno.

débil que en la década de 1960. Algunas huelgas modestamente exitosas fueron concertadas en El Teniente y Chuquicamata en julio y agosto de 1991. En octubre de 1992, los médicos del servicio nacional de salud se rebelaron contra los salarios y las condiciones de trabajo, situación que provocó la renuncia del agudo ministro de Salud, Dr. Jorge Jiménez.

En muchos sentidos, tales episodios podían considerarse simplemente como los síntomas de una revitalización gradual de la democracia. Así como el intermitente terrorismo urbano de esos años —dirigido por un grupo escindido del entonces inactivo FPMR y por un grupo rival, el MJL (Movimiento Juvenil Lautaro)— tampoco podía considerarse una amenaza seria a la estabilidad democrática, aunque aún era capaz de dejar huellas profundas. Como ocurrió especialmente con el asesinato del senador, y líder de la UDI, Jaime Guzmán, en abril de 1991. Una Ley de amnistía, que ofrecía a los terroristas un trato favorable si entregaban evidencia al Estado (septiembre de 1991), y la captura del principal dirigente lautarista (julio de 1992) ayudaron a la policía a controlar a los violentos. En todo caso, éstos eran repudiados por todos los sectores de la opinión pública —incluidos los grupos de izquierda que habían quedado fuera de la Concertación y habían formado a fines de 1991 el MIDA (Movimiento de Izquierda Democrática Allendista), creado en torno al Partido Comunista y liderado por el antiguo ministro de Hacienda Pedro Vuskovic—.

La reforma constitucional era un tema político inevitable en los años de Aylwin. No obstante, la derecha (con la ayuda de los «senadores designados») logró bloquear las propuestas de enmienda más serias de Aylwin (1992-1993), que incluían la restauración de los derechos del presidente para destituir a los comandantes en jefe y la supresión de los cupos de senadores designados. Aylwin tampoco pudo lograr cambios en el sistema electoral «binominal». Sin embargo, el gobierno y la oposición estuvieron de acuerdo en que las aproximadamente 300 municipalidades del país (todavía gobernadas por alcaldes designados por Pinochet) debían volver al régimen democrático. Por tanto, en junio de 1992 se realizaron las elecciones municipales correspondientes y los resultados arrojados coincidieron una vez más con los del plebiscito y la elección de 1989: la Concertación ganó más del 52% y la derecha, aún dividida, logró tan sólo el 30% de los votos (si incluimos a los seguidores de «Fra Fra» Errázuriz). El Partido Comunista (casi el 7%) aparecía cada vez más como la sombra de lo que había sido: tras las revoluciones de 1989 en Europa Oriental y la disolución de la misma Unión Soviética dos años después, el partido que una vez había representado un innegable marco de referencia, se veía reducido casi a su desaparición.

Dado que el periodo presidencial de Aylwin debía durar cuatro años (los mandatos futuros se fijaron en seis años en febrero de 1994), todos los precedentes de la historia chilena hacían que las maniobras para la próxima elección presidencial fueran absolutamente inevitables antes del final de 1992. El segundo Eduardo Frei ejercía una fuerte presión en la designación del PDC y, por ende, en la de la Concertación, donde el popular y

brillante socialista Ricardo Lagos (ministro de Educación de Aylwin de 1990 a 1992) era su principal rival. En lo que constituyó una clara innovación para una coalición política, las primarias dentro de la Concertación finalmente fueron acordadas. 500.000 personas votaron (mayo de 1993) y el ganador fue Frei, cuyos porcentajes en las encuestas de opinión pública eran altos. Como si se tratara de destacar las continuidades en la historia chilena, la derecha eligió (agosto de 1993) al senador Arturo Alessandri, nieto del León de Tarapacá. No obstante, para gran desilusión de la derecha, la Concertación se mantuvo disciplinada y unida —mucho más que cualquiera de las clásicas coaliciones del pasado—. De hecho, algunas de sus figuras más prominentes hablaban entones de mantener la alianza por una década o dos —aunque, como reza el proverbio: «del dicho al hecho, hay un gran trecho»—. La victoria de Frei en las elecciones (11 de diciembre de 1993) parecía inevitable y así fue: triunfó con casi el 58% del voto popular (el porcentaje más alto desde 1931); el nieto del León obtuvo cerca del 25%. Por quinta vez en la historia de Chile, un hijo seguía los pasos de su padre en la presidencia. Y, lo que sin duda era más importante, la mayoría de Frei (más que la de Aylwin en 1989 y que la de su propio padre en 1964) representaba una reivindicación electoral de la coalición gobernante. Su mandato fue inaugurado (en el engendro arquitectónico de Valparaíso que ya estaba finalizado) el 11 de marzo de 1994.

* * *

Nuestra relación debe concluir aquí, ya que evaluar la presidencia en curso al momento de escribir este libro no es en realidad trabajo nuestro. Sin embargo, sí corresponde hacerse una pregunta general: ¿cuáles son las perspectivas para la restablecida democracia chilena? En un momento especialmente desconsolador de los avatares de la República (octubre de 1975), uno de los autores de este libro le preguntó al primer Eduardo Frei si acaso él tenía razones para abrigar algunas esperanzas. Frei contestó que no tenía «razones racionales» para el optimismo, pero sí varias «razones irracionales» y que la principal de ellas era «la esencia de la historia chilena», como él mismo lo enunció —una historia que había sido liberal y democrática con ciertos momentos de reforma constructiva²⁵—. La historia de Chile *ha sido* una historia de institucionalidad y, al menos en los últimos tiempos, de creciente democracia. A pesar del trauma de 1973 y sus prolongadas secuelas, esta tendencia básica parece bastante clara. El electorado chileno quizá haya sido más lúcido en la década de 1990 que nunca antes en el pasado, aunque la apatía entre los jóvenes y los pobres (que no es un fenómeno exclusivo de Chile) es algo que requiere mayor preocupación por parte de los políticos. Mucho depende de la capacidad de los gobiernos para promover «el crecimiento en equidad». El segundo presidente Frei ha expresado en

²⁵ Conversación con Simon Collier, Santiago, 15 de octubre de 1975.

reiteradas oportunidades la esperanza de que Chile pueda disfrutar del nivel de vida del sur de Europa para el año 2010. La reverencia por el mercado libre llegó a sus extremos más grotescos en el Chile de las décadas de 1970 y 1980. El presidente Aylwin, al final de su mandato, hizo algunas cáusticas observaciones a este respecto. La tarea tanto de los políticos como los ciudadanos (y no sólo en Chile, ya que esto se ha convertido en un problema mundial) es encontrar formas de combinar las ventajas del mercado con una mayor justicia social (una imperiosa necesidad en el futuro de todos nosotros) y de proteger el medio ambiente global cada vez más deteriorado.

Concluimos con una observación personal. Nuestras esperanzas están puestas en que el capítulo de la historia que comenzó en marzo de 1990 sea uno de los más felices para Chile, un capítulo en el que el trabajo constructivo supere la tensión y el drama excelsivos. Si lo hace o no, depende, como debe ser, de la determinación y el sentido común de los chilenos.

Iniciales y acrónimos

APP	Administradora de Fondos de Pensión (desde 1980).
ANAP	Alianza Nacional del Pueblo (coalición electoral ibañista).
ANEF	Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
API	Acción Popular Independiente (partido de don Rafael Tarud).
APL	Alianza Popular Libertadora (coalición ibañista).
ASICH	Acción Sindical y Económica de Chile (movimiento sindical católico).
CAP	Compañía de Acero del Pacífico.
CEPRO	Centro de Producción (unidad agraria).
CERA	Centro de Reforma Agraria (unidad agraria).
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i> (Estados Unidos).
CNC	Consejo Nacional Campesino.
CNI	Central Nacional de Informaciones (policía secreta).
CODELCO	Corporación del Cobre.
CORA	Corporación de Reforma Agraria.
CORFO	Corporación de Fomento de la Producción.
CORVI	Corporación de la Vivienda.
COSACH	Compañía de Salitre de Chile.
COVENSA	Corporación de Ventas de Salitre y Yodo.
CTCH	Confederación de Trabajadores de Chile (confederación sindical).
CUT	(1) Central Única de Trabajadores (1953). (2) Central Unitaria de Trabajadores (1988).
DINA	Dirección de Inteligencia Nacional (policía secreta).
ENAP	Empresa Nacional de Petróleo.
ENDESA	Empresa Nacional de Electricidad.
ENTEL	Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
ENU	Escuela Nacional Unificada (proyecto de reforma educacional).
FACH	Fuerza Aérea de Chile.
FECH	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
FOCH	Federación de Obreros Chilenos.

FOSIS	Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
FPMR	Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
FRAP	Frente de Acción Popular (coalición de izquierda).
INDAP	Instituto de Desarrollo Agropecuario.
ISAPRE	Instituto de Salud Previsional (desde 1980).
IVA	Impuesto al Valor Añadido.
LADECO	Línea Aérea del Cobre.
LAN-Chile	Línea Aérea Nacional de Chile.
MADECO	Manufectura de Cobre.
MADEMSA	Manufectura de Metales S. A.
MAPU	Movimiento de Acción Popular Unitaria.
MIDA	Movimiento Democrático Allendista.
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionario.
ODEPLAN	Oficina de Planificación Nacional.
PAL	Partido Agrario-Laborista.
PDC	Partido Demócrata-cristiano.
PEM	Programa de Empleo Mínimo.
POJH	Programa Ocupacional para Jefes de Hogar.
POS	Partido Obrero Socialista.
RN	Renovación Nacional.
SNA	Servicio Nacional de Agricultura.
SNS	Servicio Nacional de Salud.
SOFOFA	Sociedad de Fomento Fabril.
SOQUIMICH	Sociedad Química Chilena.
UDI	Unión Demócrata Independiente.
UP	Unidad Popular.
USOPO	Unión Socialista Popular.
VOP	Vanguardia Organizada del Pueblo (grupo extremista).

Bibliografía

A menos que se indique lo contrario, todos los libros citados a continuación fueron publicados en Santiago de Chile.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

En esta sección hemos puesto especial énfasis en las publicaciones en español, aunque también señalamos algunos títulos en inglés (y cuatro en francés). En aquellos casos en que sabemos que los libros originalmente en inglés han sido traducidos al español, hemos indicado a continuación dichas versiones (y no sus ediciones originales). Suponemos que algunas traducciones pueden habérsenos escapado: aconsejamos a los lectores interesados en el tema que soliciten ayuda en librerías o bibliotecas especializadas. Debemos señalar aquí que ésta no es una bibliografía completa; se trata más bien de un índice de las obras que nos han sido útiles. Quienes estén interesados en ampliar sus conocimientos con respecto a periodos o temas específicos, o bien en realizar una investigación más profunda, deberían sin duda comenzar consultando el indispensable «Fichero bibliográfico» de la publicación periódica *Historia*, publicada (durante las últimas cuatro décadas) por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En caso de requerir un buen estudio de la literatura en publicaciones periódicas, ver Julio Reramal A. y Sergio Villalobos R., *Bibliografía histórica chilena. Revistas chilenas, 1843-1978* (1993). Entre las guías bibliográficas más útiles y no chilenas incluimos *Handbook of Latin American Studies* (publicado por la División Hispánica de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos; el volumen que cubre la Historia es bianual); Leslie Bethell, (ed.), *The Cambridge History of Latin America*, vol. XI, Cambridge, 1995, páginas 288-299, 451-455, y 771-787; y Harold Blakemore, *Chile*, Oxford, 1988, que contiene un valioso listado comentado de la mayoría de los textos en inglés (no sólo históricos).

HISTORIA GENERAL: A VISTA DE PÁJARO

Algunas buenas historias generales escritas por chilenos en los últimos años incluyen la de Gonzalo Izquierdo, *Historia de Chile*, 3 vols., 1989-1990; y la obra conjunta de Sergio

Villalobos R., Osvaldo Silva G., Fernando Silva V. y Patricio Estellé M., *Historia de Chile*, 4 vols., 1974-1976, también disponible en un solo volumen (publicado en 1991). Ver también Sergio Villalobos R., *Chile y su historia*, 1993. El texto mucho más antiguo de Luis Galdames, *Manual de Historia de Chile*, 1906, (14ª ed., 1974) actualizado en numerosas ediciones, no debe descartarse con demasiada prisa, ni siquiera hoy en día. Como una valiosa introducción a Chile para no chilenos, recomendamos a Benjamín Subercaseaux, *Chile, o una loca geografía*, 1940, un clásico. Stephen Clissold, *Chilean Scrapbook*, Londres, 1952, quizá sea el libro más agradable sobre Chile escrito en inglés.

HISTORIA GENERAL: PERIODO COLONIAL

La clásica relación de la historia chilena desde la conquista hasta 1833 es la de Diego Barros Arana, *Historia general de Chile*, 16 vols., 1884-1902, obra maestra de la historiografía chilena tanto en su propia época como en cualquier otra. Los sucesivos volúmenes (cuatro hasta la fecha) de Sergio Villalobos R., *Historia del pueblo chileno*, 1980, entregan la mejor descripción que tenemos de la vida colonial. Alvaro Jara, *Guerra y sociedad en Chile*, 1971, sigue siendo indispensable, al igual que Mario Góngora, *Origen de los inquilinos de Chile central*, 1974, y Néstor Meza Villalobos, *La conciencia política durante la Monarquía*, 1958. Ver también, para los temas comerciales, Eduardo Cavieres, *El comercio chileno en la economía-mundo colonial*, Valparaíso, 1996, y Sergio Villalobos R., *El comercio y la crisis colonial*, 1968. La historia económica cuantitativa de Armando de Ramón y José Manuel Larraín, *Orígenes de la vida económica chilena, 1659-1808*, 1982, constituye una notable recopilación de información. Ver también Marcello Carmagnani, *Les mécanismes de la vie économique dans une société coloniale: le Chili, 1680-1830*, París, 1973. No existen muchos textos en inglés sobre la época colonial, pero podemos sugerir algunos títulos: H. R. S. Pocock, *The Conquest of Chile*, Nueva York, 1967; Mario Góngora, «Urban Stratification in Colonial Chile», *Hispanic American Historical Review*, 1975, págs. 421-448; William F. Sater, «The Black Experiment in Chile», en Roberto Brent Toplin, (ed.), *Slavery and Race Relations in Latin America*, Westport, Conn., 1974, págs. 13-50; Eugene Korth SJ, *Spanish Policy in Colonial Chile: the Struggle for Social Justice, 1535-1700*, Stanford, 1968; Louis de Armond, «Frontier Warfare in Colonial Chile», *Pacific Historical Review*, 23, 1954, páginas 125-132; y Jacques Barbier, *Reform and Politics in Bourbon Chile, 1755-1796*, Ottawa, 1980, que se refiere a la política a finales del periodo colonial.

HISTORIA GENERAL: ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA, 1808-1833

Tres obras que cubren este vital periodo en su totalidad son Simon Collier, *Ideas y política de la independencia chilena 1808-1833*, 1977; Julio Heise González, *Años de formación y aprendizaje políticos*, 1978, y Alfredo Jocelyn-Holt, *La independencia de Chile*, Madrid, 1992. Luis Valencia Avaria, *O'Higgins, el buen genio de América*, 1980, es una excelente biografía del Padre de la Patria. En inglés, ver Mary Lowenthal Felstiner, «Kingship Politics in the Chilean Independence Movement», *Hispanic American Historical Review*, 56, 1976, págs. 58-80. Roberto Hernández P., *Diego Portales*, 1974, narra la vida del «organizador de la República», aunque una biografía anterior (que data de 1863), de Benjamín Vicuña Mackenna, *D. Diego Portales*, 3ª ed., 1974, sigue siendo muy valiosa. Para un intento de «desmitificación» (quizá no totalmente conseguido), véase Sergio Villalobos R., *Portales, una falsificación histórica*, 1989. La obra de Portales y de sus aliados conservadores es analizada en algunos sólidos ensayos de Bernardino Bravo Lira (ed.), *Portales. El hombre y su obra. La consolidación del gobierno civil*, 1989.

LA REPÚBLICA 1830-1994: ENFOQUES GENERALES

El estimulante y brillante ensayo de Alberto Edwards, *La fronda aristocrática en Chile*, 10ª ed., 1987, sigue valiendo la pena, al igual que el ensayo más reciente de Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XX y XXI*, 1981. La histórica lucha por las libertades sociales es recreada en la magnífica crónica de Ricardo Donoso, *Las ideas políticas en Chile*, 3ª ed., Buenos Aires, 1975. Germán Urzúa Valenzuela, *Historia política de Chile y su evolución electoral desde 1810 a 1992*, 1992, y Timothy R. Scully, *Los partidos políticos del Centro y la evolución política chilena*, 1992, proporcionan interesantes puntos de vista de la historia política. Para el periodo 1900-1970, se recomienda el libro de Mariana Aylwin e. a., *Chile en el siglo XX*, 1983.

HISTORIA GENERAL: SIGLO XIX, ÉPOCAS CONSERVADORA Y LIBERAL

Una célebre relación del periodo entre la Independencia y 1891 es el enorme y sumamente peculiar texto de Francisco Antonio Encina, *Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891*, 20 vols., 1942-1952, vols. IX-XX. Ricardo Donoso, *Francisco A. Encina, simulador*, 2 vols., 1969-1970, ataca con ferocidad la historia de Encina; ciertamente ésta no se iguala a la obra maestra de Barros Arana, antes citada, que el propio Barros Arana continuó en su última gran obra, *Un decenio de la historia de Chile, 1841-1851*, 2 vols., 1905-1906.

Otras relaciones de algunos periodos parciales son Ramón Sotomayor Valdés, *Historia de Chile bajo el gobierno del general don Joaquín Prieto*, 3ª ed., 4 vols., 1962–1980; Agustín Edwards, *Cuatro presidentes de Chile*, 2 vols., Valparaíso, 1932; y Alberto Edwards, *El gobierno de don Manuel Montt*, 1932. Enfoques particulares del periodo (totales o parciales) se encuentran en Sergio Villalobos R., «Sugerencias para un enfoque del siglo XIX», *Estudios CIEPLAN*, n° 12, 1984, págs. 9–36, y en los ensayos de Simon Collier, «Gobierno y sociedad en Chile durante la República Conservadora», *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 3ª serie, n° 1, Buenos Aires, 1989, págs. 115–126, y «Conservatismo chileno, 1830–1860: temas e imágenes», *Nueva Historia*, n° 7, Londres, 1983, págs. 143–163. *Nueva Historia* fue una revista de excepcional calidad publicada por historiadores chilenos exiliados en el Reino Unido durante la dictadura de Pinochet. Hay algunos buenos ensayos en Ricardo Krebs y Cristián Gazmuri (eds.), *La revolución francesa y Chile*, 1990. Cristián Gazmuri, *El «48» chileno: igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos*, 1992, arroja luz sobre algunos actores políticos emergentes a finales del siglo XIX. La relación tradicional de la guerra del Pacífico sigue siendo Gonzalo Bulnes, *La Guerra del Pacífico*, 3 vols., 1911–1919. Una relación más concisa (1927) puede encontrarse en Arturo Benavides Santos, *Historia compendiada de la Guerra del Pacífico*, 2ª ed., Buenos Aires, 1972. Ver también William F. Sater, *Chile and the War of the Pacific*, Lincoln, Neb., 1986, centrado en el desarrollo interno más que en la historia militar. El libro del mismo autor *The Heroic Image in Chile. Arturo Prat, Secular Saint*, Berkeley, 1973, analiza los mitos que se arraigaron en el héroe máximo de la guerra.

HISTORIA GENERAL: ÉPOCA PARLAMENTARIA, ALESSANDRI E IBÁÑEZ

La «guerra de religión» que alcanzó su punto álgido a mediados de la década de 1880 está bien cubierta en Ricardo Krebs (ed.), *Catolicismo y laicismo: las bases doctrinarias del conflicto entre la Iglesia y el Estado, 1875–1885*, 1981. Ver también Simon Collier, «Religious Freedom, Clericalism and Anticlericalism in Chile, 1820–1920», en Richard Helmstadter (ed.), *Freedom and Religion in the Nineteenth Century*, Stanford, 1997, págs. 302–338 y 419–424. Harold Blakemore, *Gobierno chileno y salitre inglés, 1886–1896. Balmaceda y North*, 1977, describe la presidencia de Balmaceda y los hechos que rodearon la guerra civil de 1891. Ver también Crisóstomo Pizarro, *La revolución de 1891*, Valparaíso, 1971, y, para algunas revisiones recientes de la crisis, Luis Ortega (ed.), *La Guerra Civil de 1891: cien años hoy*, 1993. Para la época parlamentaria en general, véanse tanto Julio Heise G., *Historia de Chile. El periodo parlamentario, 1861–1925*, 2 vols., 1974–1982, como Leopoldo Castedo, *Resumen de la historia de Chile, 1891–1925*, 1982,

ambos son muy informativos. Igual que, en términos políticos, Manuel Rivas Vicuña, *Historia política y parlamentaria de Chile*, 3 vols., 1964, —algo así como un «cajón de sastre», pero que vale la pena explorar—. La obra en varios volúmenes *Historia de Chile*, en curso desde 1981, de Gonzalo Vial, es esencial para el periodo 1891–1925; su reiterado uso de la anécdota la hace más fácil de leer. Ver también René Millar, «El parlamentarismo chileno y sus crisis, 1891–1924», en Óscar Godoy (ed.), *Cambio de régimen político*, 1992, págs. 249–298, y Harold Blakemore, «El periodo parlamentario en la historia chilena: algunos enfoques y reflexiones», en *Dos estudios sobre salitre y política en Chile, 1991–un «homenaje» chileno a Blakemore*. En inglés, un útil estudio del periodo parlamentario que compara Chile con Argentina, es Karen Remmer, *Party Competition in Argentina and Chile: Political Recruitment and Public Policy, 1890–1930*, Lincoln, Neb., 1984. Para el León de Tarapacá y su época, ver la relación aún absolutamente indispensable de Ricardo Donoso, *Alessandri, agitador y demoleador*, 2 vols., México DF, 1952–1954. René Millar, *La elección presidencial de 1920*, 1981, cubre la crisis electoral de 1920. Carlos Vicuña, *La tiranía en Chile*, 2ª ed., 1988, realiza una relación incomparable y chismosa de la política de la década de 1920. Las memorias del propio Arturo Alessandri, *Recuerdos de gobierno*, 3 vols., 1964, están al servicio de sí mismo, como todas las memorias de este tipo, pero eso no las hace menos interesantes. El general Ibáñez no dejó sus memorias y necesita en forma urgente un estudio a gran escala; Luis Correa Prieto, *El presidente Ibáñez*, 1962, contiene largas entrevistas con él que suelen ser reveladoras. *La dictadura de Ibáñez*, 1996, el cuarto volumen de la gran historia de Gonzalo Vial (ver más adelante) cubre el régimen de Ibáñez. Ver también Jorge Rojas, *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos, 1927–1931*, 1993. Para los confusos acontecimientos de mediados de 1932, ver Susana Simonetti de Groote, «El gobierno de Carlos Dávila, 16 de junio–13 de septiembre de 1932», *Boletín de la Academia Chilena de la Historia*, 105, 1995, págs. 293–362. Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, *Las Milicias Republicanas. Los civiles en armas, 1932–1936*, 1992, analiza el principal grupo paramilitar de los años 1932–1936.

HISTORIA GENERAL: DESDE EL FRENTE POPULAR HASTA 1964

Arturo Olavarría Bravo, *Chile entre dos Alessandri*, 4 vols., 1962–1965 es una relación llena de chismes escrita por un político activo con tendencias graciosamente diferentes. Paul Drake, *Socialismo y populismo: Chile, 1936–1973*, Valparaíso, 1992, es un valioso estudio del periodo; también se encuentra mucha información en Teresa Pereira, *El Partido Conservador, 1930–1965: ideas, figuras y actitudes*, 1994. Las elecciones de 1932 a 1973 quedan cubiertas en César Caviedes, *The Politics of Chile. A Sociographical Assessment*, Boulder, Colo., 1979. Ver también Bernardino Bravo Lira, *Régimen de gobierno*

y partidos políticos en Chile, 1924–1973, 1978; Julio Faúndez, *Marxism and Democracy in Chile: from 1952 to the Fall of Allende*, New Haven, 1988; y Carmelo Furci, *The Chilean Communist Party and the Road to Socialism*, Londres, 1984. Una crónica de los tres gobiernos radicales se encuentra en Florencio Durán B., *El partido Radical*, 1952; ver también Jaime Etcheberry Jensen, «El advenimiento de Gabriel González Videla al gobierno y el fracaso de la Unión Nacional, 1946–1948», en *Revista de Historia*, vol. 2, Concepción, 1992, págs. 73–101. Gabriel González Videla, *Memorias*, 2 vols., 1975, son las únicas memorias presidenciales del período. El segundo gobierno de Ibáñez es examinado en Tomás Moulián, *El gobierno de Ibáñez, 1952–1958*, 1985, y la caída del PDC, en George Grayson, *El Partido Demócrata Cristiano chileno*, Buenos Aires, 1968. Para el segundo Alessandri, ver Patricia Arancibia e. a., *Jorge Alessandri, 1896–1986*, 1996. Para comienzos de la década de 1960, ver Ernst Halperin, *Nationalism and Communism in Chile*, Cambridge, Mass., 1965, y Ben G. Burnett, *Political Groups in Chile: the Dialogue between Order and Change*, Austin, 1970. Buenas descripciones del sistema político tal como funcionaba en la década de 1950 y 1960 aparecen en Federico G. Gil, *The Political System of Chile*, Boston, 1966, y Arturo Valenzuela, *Political Brokers in Chile*, Durham, N. C., 1977; el último de ellos presenta un estudio fascinante de las relaciones centrales/locales.

HISTORIA GENERAL: CHILE ENTRE DOS FREI, 1964–1994

Para cubrir gran parte de este período, ver Alan Angell, *Chile de Alessandri a Pinochet*, 1993. Buenos resúmenes del sexenio del PDC se encuentran en Patricio Dooner, *Cambios sociales y conflicto político: el conflicto político nacional durante el gobierno de Eduardo Frei*, 1984, y Ricardo Yocolevsky, *La Democracia Cristiana chilena y el gobierno de Eduardo Frei*, México D. F., 1987. Arturo Olavarría Bravo, *Chile bajo la democracia cristiana*, 6 vols., 1965–1970, entrega una detallada crónica, con los celosos puntos de vista del autor bien expuestos. Michael Fleet, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, 1985, toma la historia del PDC a través de la década de 1980, aunque su título parece ahora un poco extraño. Ver también Wilhelm Hofmeister, *La opción por la democracia. Democracia Cristiana y desarrollo político en Chile, 1964–1994*, 1995. Útiles análisis retrospectivos de la presidencia de Allende se encuentran en Federico Gil, Ricardo Lagos y Henry Landsberger (eds.), *Chile 1970–1973: lecciones de una experiencia*, Madrid, 1977; y en el simposium más reciente, Matías Tagle (ed.), *La crisis de la democracia en Chile: antecedentes y causas*, 1992. Una relación polémica casi contemporánea que aún tiene interés es la de Genaro Arriagada, *De la vida chilena a la vía insurreccional*, 1974. Un inteligente y muy detallado estudio del tema del «poder

popular» puede encontrarse en Hugo Cancino T., *Chile. La problemática del Poder Popular en el Proceso de la Vía Chilena al Socialismo*, Aarhus, Dinamarca, 1988. Ver también Miguel González P. y Arturo Fontaine (eds.), *Los mil días de Allende*, 2 vols., 1997 –una valiosa colección de editoriales de periódicos y tiras cómicas–. El papel del PDC en el período de Allende aparece descrito en Patricio Dooner, *Crónica de una democracia cansada*, 1985. Las memorias del general Carlos Prats, *Memorias: testimonio de un soldado*, 1985, son fascinantes. Arturo Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*, Baltimore, 1978, quizá siga siendo el mejor texto por separado sobre la convulsión política de la época. Ver también Paul Sigmund, *The Overthrow of Allende and the Politics of Chile*, Pittsburgh, 1978; Edy Kaufman, *Crisis in Allende's Chile: New Perspectives*, Nueva York, 1988; y Mark Falcoff, *Modern Chile, 1970–1988*, New Brunswick, N. J., 1989, desde un punto de vista conservador norteamericano. Peter Winn, *Weavers of Revolution: the Yarrur Workers and Chile's Road to Socialism*, Nueva York, 1986, narra de manera brillante este período desde la perspectiva de los trabajadores de una importante planta textil. En el período de Pinochet, Ahumada et al., *Chile, la memoria prohibida*, 3 vols., 1989, entrega un escalofriante testimonio de la represión de su primera década. Ver también Patricia Verdugo, *Caso Arellano: los zarpazos del puma*, 1989, y Patricia Politzer, *Miedo en Chile*, 1985. Las memorias del general Pinochet, *Camino recorrido*, 4 vols., 1990–1994, obviamente merecen atención, pero de ninguna manera constituyen una lectura vivificante. Genaro Arriagada, *La política militar de Pinochet*, 1985, es excelente. Tanto J. Samuel Valenzuela y Arturo Valenzuela (eds.), *Military Rule in Chile: Dictatorship and Opposition*, Baltimore, 1986, y Paul Drake e Iván Jaksí (eds.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982–1990*, 1993, incluyen buenos ensayos sobre diversos aspectos de Chile durante esos años. A pesar de su tono (a veces) desagradable, James R. Whelan, *Desde las cenizas: vida, muerte y transformación de la democracia en Chile, 1833–1988*, 1993, también presenta un material interesante. El papel de la Iglesia bajo Pinochet (y también en los años del PDC y de la UP) se encuentra bien descrito en Brian Smith, *The Church and Modern Politics in Chile*, Princeton, 1982. Para la situación en las poblaciones durante la dictadura, ver Cathy Lisa Schneider, *Shantytown Protest in Pinochet's Chile*, Filadelfia, 1995. Dos excelentes libros que cubren la etapa final del régimen de Pinochet y la restauración democrática son Ascanio Cavallo, *Los hombres de la transición*, 1992, que merece convertirse en un clásico, y Rafael Orano, *Crónica de la transición*, 1995, relación detallada de la presidencia de Aylwin. Los títulos de interés en inglés incluyen Gerardo Munck, «Authoritarianism, Modernization and Democracy in Chile», *Latin American Research Review*, 29, 1994, págs. 188–211; David Hojman, *Chile: the Political Economy of Development and Democracy in the 1990s*, Pittsburgh, 1993; y Joaquín Fernando y Michael A. Morris, *Democracy in Chile: Transition and Consolidation 1987–2000*, *Conflict Studies*, vol. 279, Londres, 1995.

HISTORIA DIPLOMÁTICA

El único trabajo global, con muchos datos, es Mario Barros van Buren, *Historia diplomática de Chile, 1541-1938*, Barcelona, 1970; su edición reciente (1990) agrega poco. Robert N. Burr, *By Reason or Force. Chile and the Balancing of Power in South America, 1830-1905*, Los Ángeles, 1965, analiza la política exterior del siglo XIX. Para las relaciones Chile-Estados Unidos en la década de 1930, ver Joaquín Fermandois, *Abismo y cimienzo: Gustavo Ross y las relaciones entre Chile y Estados Unidos, 1932-1938*, 1997. Del mismo autor, *Chile y el mundo, 1970-1973. La política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional*, 1985, cubre de manera admirable las diversas posturas diplomáticas del gobierno de Allende. Cierta material sobre la política exterior del general Pinochet puede encontrarse en Heroldo Muñoz, *Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno*, 1986. Ver también Joaquín Fermandois, «Chile and the Great Powers», en Michael A. Morris (ed.), *Great Power Relations in Argentina, Chile and Antarctica*, Londres, 1990, un excelente ensayo sobre la década de 1960.

LAS FUERZAS ARMADAS

Alain Joxe, *Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile*, 1970, constituye una mera introducción al tema, pero nada más. Ver, para el siglo XIX, Sergio Vergara Q., *Historia social del Ejército de Chile*, 1993. Dos obras de varios volúmenes, *Historia del Ejército Chileno*, (1983-1986) y Rodrigo Fuenzalida Bae, *La armada de Chile*, (en preparación, 1975) describen, quizá con excesivo detalle, el desarrollo de estos dos servicios. Para un resumen más breve de la historia del Ejército, ver Carlos López Urrutia, *Historia de la marina chilena*, 1969. Carlos Maldonado, «Los Carabineros de Chile: historia de una policía militarizada», *Ibero-Americana: Nordic Journal of Latin American Studies*, vol. 20, 3, 1990, págs. 3-31, se refiere a la policía.

HISTORIA CULTURAL E INTELECTUAL

Hernán Godoy U., *La cultura chilena*, 1982, entrega una visión panorámica de la cultura bien ilustrada. Para libros y literatura en general, ver Bernardo Subercaseaux, *Historia del libro en Chile*, 1993, y, para los escritores, las secciones correspondientes de Roberto González Echevarría y Enrique Pupo-Walker (eds.), *The Cambridge History of Latin American Literature*, 3 vols., Cambridge, 1996. Los escritos de Pablo Neruda se encuentran en cualquier librería digna de ese nombre. El mejor estudio biográfico sobre su vida

Bibliografía

es Volodia Teitelboim, *Neruda*, 5ª ed., 1992. Los libros del ex senador Teitelboim sobre Gabriela Mistral (1991) y Vicente Huidobro (1993) no son tan buenos, pero lo que él tiene que decir siempre es inteligente. El retrato de Joan de su esposo, Víctor Jara, cruelmente asesinado, *Víctor, un canto no truncado*, Concepción, 1988, es una buena introducción a la historia de la Nueva Canción Chilena. Para una valiosa relación de la danza nacional (y las canciones vinculadas a ella), ver Samuel Claro Valdés et al., *Chilena o cueca tradicional*, 1994, que incluyen los textos de numerosas cuecas. Allen Woll, *A Functional Past. The Uses of History in Nineteenth Century Chile*, Baton Rouge, 1982, constituye un admirable estudio en términos historiográficos en su etapa clásica; ver también Sergio Villalobos R., *Historia del pueblo chileno*, vol. I, 1980, págs. 9-51. Iván Jaksí, *Academic Rebels in Chile. The Role of Philosophy in Higher Education and Politics*, Albany, N. Y., 1989, analiza el papel de los filósofos, con cierto énfasis en el siglo XX. Para la colosal influencia de Andrés Bello, ver La Casa de Bello, *Bello y Chile. Tercer congreso del bicefenario*, 2 vols., Caracas, 1981. Algunos buenos ensayos sobre el increíble académico José Toribio Medina se encuentran en Maury A. Bromsen (ed.), *José Toribio Medina, Humanist of the Americas: an Appraisal*, Washington D. C., 1960. Para la historia de la Universidad de Chile, ver Sol Serrano, *Universidad y nación. Chile en el siglo XX*, 1994; Rolando Mellafe, Antonia Rebolledo, y Mario Cárdenas, *Historia de la Universidad de Chile*, 1992; y Sol Serrano e Iván Jaksí, «In the Service of the Nation. The Establishment and Consolidation of the University of Chile, 1842-1879», *Hispanic American Historical Review*, vol. 70, 1990, págs. 139-71. Ricardo Krebs, *Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1988*, 1994, cuenta la historia de la Católica. Juan Guillermo Muñoz Correa, *La Universidad de Santiago de Chile: sobre sus orígenes y su desarrollo histórico*, 1987, estudia la ahora floreciente institución que comenzó como la Universidad Técnica del Estado, fundada por el presidente González Videla.

HISTORIA ECONÓMICA GENERAL

La literatura sobre la historia económica se está desarrollando ahora de manera muy prometedora. Una fuente fundamental es Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, *Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930*, 1991, que incluye una sobetbia bibliografía (por Rafael Sagredo) con casi 1.000 citas. Markos Mamalakis, *The Growth and Structure of the Chilean Economy*, New Haven, 1976, es un estudio general a vuelo de pájaro. Algunas estadísticas globales están contenidas en Markos Mamalakis, *Historical Statistics of Chile*, 6 vols., Westport, Conn., 1979-1989. Ciertos episodios y periodos particulares de la historia económica quedan cubiertos por Luis Ortega, «Economic Policy and Growth in Chile from Independence to the War of the Pacific», en Christopher Abel y Colin Lewis (eds.),

Latin America. Economic Imperialism and the State, Londres, 1985, págs. 147–171; Jorge David, *Historia del trigo: una historia desconocida*, 1993; William F. Sater, «Nacionalismo económico y reforma tributaria a fines del siglo xx», *Estudios Económicos*, vol. 18, 2, 1991, págs. 215–244, y del mismo autor «Chile and the World Depression of the 1870s», *Journal of Latin American Studies*, vol. 11, 1, 1979, págs. 67–99. Para las ideas proteccionistas, ver Sergio Villalobos y Rafael Sagredo (eds.), *Ensayistas proteccionistas del siglo xx*, 1994. Gert Wagner, *Trabajo, producción y crecimiento: la economía chilena, 1860–1930*, 1992, es recomendable. El impacto de la Primera Guerra Mundial está cubierto de manera muy apropiada en Juan Ricardo Couyoumdjian, *Chile y Gran Bretaña durante la primera guerra mundial y la posguerra, 1914–1921*, 1986. Para los periodos posteriores, ver P. T. Ellsworth, *Chile. An Economy in Transition*, Nueva York, 1945, centrado en la Depresión, y Ricardo French-Davis, *Políticas económicas en Chile, 1952–1970*, 1973, muy detallado. La crucial dimensión económica del periodo de Allende está descrita concisamente en Alberto Baltra C., *Gestión económica del Gobierno de la Unidad Popular*, 1973, y es analizada con precisión por Stefan de Vylder en su *Allende's Chile: The Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad Popular*, Cambridge, 1976. Ver también Juan Andrés Fontaine, «Transición económica y política en Chile, 1970–1990», *Estudios Públicos*, 50, 1993, págs. 229–279. Arturo Fontaine Aldunate, *Los economistas y el presidente Pinochet*, 2ª ed., 1988, entrega una fascinante descripción de las medidas adoptadas tras «el camino chileno al capitalismo». Respecto de este tema, ver también Juan Gabriel Valdés, *La Escuela de Chicago: Operación Chile*, Buenos Aires, 1989. Quizá el mejor estudio global de la economía durante el periodo de Pinochet sea Sebastián y Alejandra Edwards, *Monetarismo y liberalización: el experimento chileno*, México DF, 1992. Joseph Collins y John Lear, *Chile's Free Market Miracle: a Second Look*, Oakland, Cal., 1995, es útil para corregir los optimistas informes del reciente crecimiento económico (independiente de lo sustancial que sea), especialmente en la prensa económica internacional. La trayectoria inflacionaria de Chile tiene un famoso análisis en Frank W. Fetter, *La inflación monetaria en Chile*, 1957, pero, sobre este tema, es vital consultar otras fuentes, por ejemplo, Thomas C. Wright, «Origins of the Politics of Inflation in Chile, 1888–1918», *Hispanic American Historical Review*, vol. 53, 1973, págs. 239–259, Albert Hirschman, «Inflation in Chile», en su *Journeys Toward Progress*, Nueva York, 1963, páginas 161–223, y René Millar, *Historia económica de Chile*, 1994, que sigue la política fiscal hasta 1925. Ver también Paul Drake, *The Money Doctor in the Andes. The Kemmerer Missions, 1923–1933*, Durham, N. C., 1989, págs. 76–124. Las relaciones económicas de la Gran Bretaña del siglo xx con Chile quedan cubiertas en Eduardo Cavieres, *Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820–1880: un ciclo de historia económica*, Valparaíso, 1988, y John Mayo, *British Merchants and Chilean Development, 1851–1886*, Boulder, Colo., 1987. Juan Ricardo Couyoumdjian, René Millar y Josefina Tocornal, *Historia de la*

Bolsa de Comercio de Santiago, 1893–1993, 1993, constituye un estudio impresionantemente detallado, aunque no recomendable para lectores impacientes.

EL CAMPO Y LA AGRICULTURA

Arnold Bauer, *La sociedad rural chilena desde la conquista española hasta nuestros días*, 1994, es una obra clave, centrada en el Valle Central de mediados del siglo xx. Gene Ellis Martin, *La división de la tierra en Chile central*, 1960, evalúa la posición de mediados del siglo xx. Ver también Cristóbal Kay, «The development of the Chilean hacienda system, 1850–1973», en Kenneth Duncan y Ian Rutledge (eds.), *Land and Labour in Latin America*, Cambridge, 1977, págs. 103–139. Una famosa descripción general (1936) de la agricultura de comienzos del siglo xx es George M. McBride, *Chile: su tierra y su gente*, 1970. José Bengoa, *El poder y la subordinación. Historia social de la agricultura chilena*, 2 vols., 1984, expone el lado oscuro de la vida de la «casa grande». Thomas C. Wright, *Landowners and Reform in Chile: the Sociedad Nacional de Agricultura, 1919–1940*, Urbana, Ill., 1982, estudia la idea que dio origen al SNA, el grupo de presión de los terratenientes. Brian Loveman, *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919–1973*, Bloomington, Indiana, 1976, documenta los intentos de sindicalización de los trabajadores rurales. José Garrido, Cristián Guerrero y María Soledad Valdés, *Historia de la reforma agraria*, 2ª ed., 1990, se interna en el tema de la reforma agraria; ver también María Antonieta Huerta, *Otro agro para Chile: historia de la reforma agraria en el proceso social y político*, 1989. Para los efectos del neoliberalismo en el campo, ver José Bengoa, *El campesinado chileno después de la reforma agraria*, 1983, y David Hojman (ed.), *Neo-Liberal Agriculture in Rural Chile*, Londres, 1990.

LA MINERÍA, LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Pierre Vayssière, *Un siècle de capitalisme minier au Chili, 1830–1930*, París, 1980, constituye una buena mirada general a la minería. Ieland Pederson, *The Mining Industry of the Norte Chico, Chile*, Evanston, Ill., 1966, examina la minería del cobre y la plata en sus clásicos inicios durante el siglo xx. En lo que se refiere al salitre, ver Óscar Bermúdez, *Historia del salitre desde sus orígenes hasta la Guerra del Pacífico*, 1963, e *Historia del salitre desde la Guerra del Pacífico hasta la revolución de 1891*, 1984, también Ana Durruy, *Salitre: barina de luna llena*, Antofagasta, 1993. Thomas O'Brien, *The Nitrate Industry and Chile's Crucial Transition, 1870–1891*, Nueva York, 1982, también analiza la formación de la industria del salitre. Ver además Donald D. Crozier, «La industria del

yodo, 1815–1915», *Historia*, 27, 1993, págs. 141–212. Clark Reynolds, «Development Problems of an Export Economy», en Markos Mamalakis y Clark Reynolds, *Essays on the Chilean Economy*, Homewood, Ill., 1965, págs. 203–398, se concentra en la minería del cobre en épocas más recientes. La minería del cobre queda cubierta con Enrique Figueroa C., *Carbón: cien años de historia, 1848–1960*, 1987. Sobre este tema, ver también las contribuciones vitales de Luis Ortega. «La frontera carbonífera, 1840–1900», *Mapocho*, 31, 1992, págs. 131–148, y «El mundo del carbón en el siglo XIX», en Marcela Orellana y Guillermo Muñoz (eds.), *Mundo minero*, 1992, págs. 101–124. Para los comienzos de la industria manufacturera, ver los importantes artículos de Luis Ortega, «Acercas de los orígenes de la industrialización chilena, 1860–1879», *Nueva Historia*, vol. 1, 2, Londres, 1981, págs. 3–54 y «El proceso de industrialización en Chile, 1850–1930», *Historia*, 26, 1991, págs. 213–245. En *Chile. 100 años de industria*, 1993, publicado por la SOFOA; y, en un simposium concebido de manera muy ocurente, Sergio Villalobos R. (ed.), *Historia de la ingeniería en Chile*, 1993, se encuentra valiosa información. Buenas contribuciones al tema de las comunicaciones han sido escritas en inglés. Sobre los primeros ferrocarriles, ver Robert Oppenheimer, «Chile's Central Valley Railroads and Economic Development in the Nineteenth Century», *Proceedings of the Pacific Coast Council on Latin American Studies*, 6, 1977–1979, págs. 73–86. La historia del ferrocarril, clave del norte, aparece en una detallada crónica de Harold Blakemore en su último libro, *From the Pacific to La Paz. The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company 1888–1988*, Londres, 1990. Para la construcción de la red telegráfica, ver John J. Johnson, *Pioneer Telegraphy in Chile*, Stanford, 1948. Sobre la marina mercante, ver la notable monografía de Claudio Véliz, *Historia de la marina mercante de Chile*, 1961. Basil Lubbock, *The Nitrate Clippers*, Glasgow, 1932, narra la historia de los hermosos barcos veleros que transportaban el salitre chileno a Europa.

ASPECTOS DE LA HISTORIA SOCIAL

Hernán Godoy U. (ed.), *Estructura social de Chile*, 1971, es un compendio de lecturas históricas. Gabriel Salazar, *Labradores, peones y proletarios*, 1985, analiza de manera sugerente la cambiante vida de los pobres en la ciudad y el campo durante el periodo previo y posterior a la Independencia. Algunos valiosos ensayos se encuentran en Teresa Pereira (ed.), *Formas de sociabilidad en Chile, 1840–1940*, 1992. La cambiante clase alta aparece retratada de manera animada en Sergio Villalobos R., *Origen y ascenso de la burguesía chilena*, 1987. Vicente Espinoza, *Para una historia de los pobres de la ciudad*, 1988, echa una mirada a la pobreza urbana en los años posteriores a 1900. El creciente interés del siglo XX en las mejoras sociales es analizado en forma interesante en James O.

Morris, *Las élites, los intelectuales y el consenso*, 1967. Ver también Álvaro Góngora E., *La prostitución en Santiago, 1813–1931*, 1994. Los primeros años del movimiento obrero son descritos con gran detalle por Peter de Shazo en su *Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1902–1927*, Madison, Wis., 1983, un estudio de primer orden que recupera para los anarquistas en el lugar que realmente les corresponde en la historia. Ver también Crisóstomo Pizarro, *La huelga obrera en Chile, 1890–1970*, 1986. Alan Angell, *Politics and the Labour Movement in Chile*, Londres, 1972, es una relación indispensable de la posición que el movimiento laboral había alcanzado antes de sus tristes reveses tras 1973. Sobre la historia de las mujeres, existen algunos títulos esenciales: Sergio Vergara Quiroz (ed.), *Cartas de mujeres en Chile, 1630–1885*, 1987; Felicitas Klimpel, *La mujer chilena: el aporte femenino al progreso de Chile, 1910–1960*, 1962; Lucía Santa Cruz, Teresa Pereira, Isabel Zegers, y Valeria Maino, *Tres ensayos sobre la mujer chilena*, 1978; Elizabeth Hutchinson, «El feminismo en el movimiento obrero chileno: la emancipación de la mujer en la prensa obrera feminista, 1905–1908», *Proposiciones*, 21, 1992, págs. 50–64; Gabriel Salazar, «La mujer del bajo pueblo en Chile: bosquejo histórico», *Proposiciones*, 21, 1992, págs. 89–107; Ana María Arreaga y Virginia Figueroa, *Identidad, trabajo, organización. La mujer en la investigación social*, 1993; Diamela Eltit, *Crónica del sufragio femenino en Chile*, 1994; Claudia Rojas M., «Hacia la formación de una conciencia feminista en Chile: antecedentes históricos, 1913–1952», *Secuencia*, 36, México DF, 1996, págs. 151–174. Los historiadores le han prestado cierta atención a las minorías étnicas que existían junto a la mayoría criolla-mestiza. Para las minorías más importantes, los «primeros chilenos» que aún quedan, ver José Bengoa, *Historia del pueblo mapuche: Siglos XIX y XX*, 1984, una obra importante que se basa sustancialmente en la historia oral. La decadencia y caída de la «indómita Araucanía» aparece brevemente resumida en Jacques Rossignol, «Chiliens et Indiens Araucans au milieu du XIX^e siècle», *Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brasílien*, 20, 1973, págs. 69–98. Louis C. Faron, *The Mapuche Indians of Chile*, Nueva York, 1968, entrega una descripción moderna. Los grupos inmigrantes de los siglos XIX y XX están cubiertos en la obra monumental sobre los alemanes de Jean-Pierre Blancpain, *Les allemands au Chili, 1816–1945*, Colonia, 1974, y del mismo autor *Francia y los franceses en Chile*, 1987, John Mayo, «The British Community in Chile before the Nitrate Age», *Historia*, 22, 1987, págs. 135–150; Gunter Bohn, «Inmigración de judíos de habla alemana a Chile y Perú durante el siglo XIX», *Jahrbuch für Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, 25, 1988, págs. 455–493; Mario Matus González, *Tradición y adaptación: vivencia de los sefardíes en Chile*, 1993; Myriam Olguín Tenorio, *La inmigración árabe en Chile*, 1990; Carlos Díaz, *Italianos en Chile. Breve historia de una inmigración*, 1988. Un útil ejemplo de la forma en que pueden combinarse la historia social y de los inmigrantes es Baldomero Estrada T., «Los conflictos sociales en Valparaíso a fines del siglo XIX: sus repercusiones en la colectividad italiana», *Atenea*, 473, 1996, págs. 171–194.

HISTORIA REGIONAL Y URBANA

La historia local (a diversos niveles) gozó de gran popularidad en Chile, al igual que en otras partes. Dos valiosos ejemplares pertenecientes a este género son Fernando Campos Harriet, *Historia de Concepción, 1550-1970*, 1982, y Mateo Martini B., *Historia de la región magallánica*, 2 vols., Punta Arenas, 1992. Algunas obras serías sobre la historia urbana tanto de Santiago como de Valparaíso están ahora en preparación y esperamos que aparezcan pronto. Un espléndido ejemplo de lo que puede lograrse en este campo es Patricio Gross, Armando de Ramón y Enrique Vial, *Imagen ambiental de Santiago, 1880-1930*, 1984.

Los autores agradecen a Paula Covington (Biblioteca Jean & Alexander Heard, Universidad Vanderbilt) su ayuda en la preparación de esta Bibliografía.

Índice de nombres

- | | |
|--|---|
| Abascal, Virrey José Fernando, 42. | Altamirano, General Luis, 189 |
| Abrao, Batalla de, 114. | Amunátegui, Miguel Luis, 101 |
| Aguirre Cerda, Presidente Pedro, 207-208, 212-215, 231, 233, 234 | Ancón, Tratado de, 129 |
| Aguirre, Francisco de, 20 | Andwandter, Carlos, 94 |
| Aguirre, Isidora, 260 | Angell, Alan, 321 |
| Alarcón, Rolando, 278 | Antúñez, Nemesio, 261 |
| Alberto, Tótila, 261 | Araya, Capitán Arturo, 304 |
| Alessandri, Arturo (nieta), 331 | Arcos, Santiago, 86, 93, 104 |
| Alessandri, Fernando, 217, 218 | Arica, Batalla de, 125 |
| Alessandri, Presidente Arturo, 139, 140, 181, 182, 185-193, 197, 198, 200-208, 211, 212 | Arrau, Claudio, 261 |
| Alessandri, Presidente Jorge, 209, 212, 220, 226-229, 239, 242, 243, 245-247, 268, 271, 279-282, 312, 322-325, 327, 330 | Arteaga C., General Justo, 124 |
| Alfonso, Pedro Enrique, 222, 223 | Arthur, Presidente Chester A., 128 |
| Allende, Presidente Dr. Salvador, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 245, 263, 276, 279, 281-290, 293, 295, 297-300, 303, 305, 306, 309, 310, 326 | Aylwin, Presidente Patricio, 263, 303, 304, 323-328, 332 |
| Allende Padín, Dr. Ramón, 117 | Balmaceda, Presidente José Manuel, 112, 118, 136, 139, 141-147, 159 |
| Allende, Isabel, 260 | Bañados Espinosa, Julio, 146, 147 |
| Allende, Pedro Humberto, 167 | Baquetano, General Manuel, 125, 127, 136, 147 |
| Almagro, Diego de, 13 | Barahona, Bernardino, 106 |
| Almeyda, Clodomiro, 296 | Barbier, Jacques, 29 |
| Alonso, José, 117 | Barnard, John James, 50 |
| Altamirano, Carlos, 286, 304, 305 | Barrios, Eduardo, 166 |
| Altamirano, Eulogio, 116 | Barros Arana, Diego, 101, 116, 121, 165, 178, 179, 182 |
| | Barros Borgoño, Luis, 182, 186, 192 |
| | Barros Jarpa, Ernesto, 174 |
| | Barros Luco, Presidente Ramón, 139, 141, 145, 146 |